

# Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19

Emmanuel Abuelafia  
José Luis Saboin

Departamento de países del  
Grupo Andino

DOCUMENTO PARA  
DISCUSIÓN N°  
IDB-DP-00849

# Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19

Emmanuel Abuelafia  
José Luis Saboin

Diciembre 2020

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Emmanuel Abuelafia: [eabuelafia@iadb.org](mailto:eabuelafia@iadb.org); José Luis Saboin: [jluissa@iadb.org](mailto:jluissa@iadb.org)

# Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19

Emmanuel Abuelafia y José Luis Saboin<sup>1</sup>

## Resumen

El colapso en que se encuentra la economía venezolana no tiene precedentes. La economía se contrajo un 70% entre 2013 y 2019, a lo que se sumaría una reducción esperada del 30% en 2020, lo que la hace que se trate de una de las mayores crisis económicas del mundo. Como parte de esta crisis, ha habido una estrepitosa caída del poder adquisitivo de los hogares, con un consiguiente incremento de la pobreza y de la desigualdad. Asimismo, otros indicadores sociales, como los relacionados con la alimentación y la salud, se han deteriorado sustancialmente y la provisión de servicios básicos se ha desmoronado. La pandemia del COVID-19 impacta de forma importante en el país, y la capacidad de reacción por parte del sector público es muy limitada. Los recursos fiscales son muy escasos para proveer alimentos a la población y la condición del sector salud es acuciante. El presente estudio tiene por objetivo resumir las explicaciones que subyacen a la debacle económica del país desde antes de la pandemia del COVID-19, analizar los impactos de la pandemia sobre el país y también delinear, para el corto y el mediano plazo, acciones prioritarias orientadas a la emergencia sanitaria y a la recuperación de la economía.

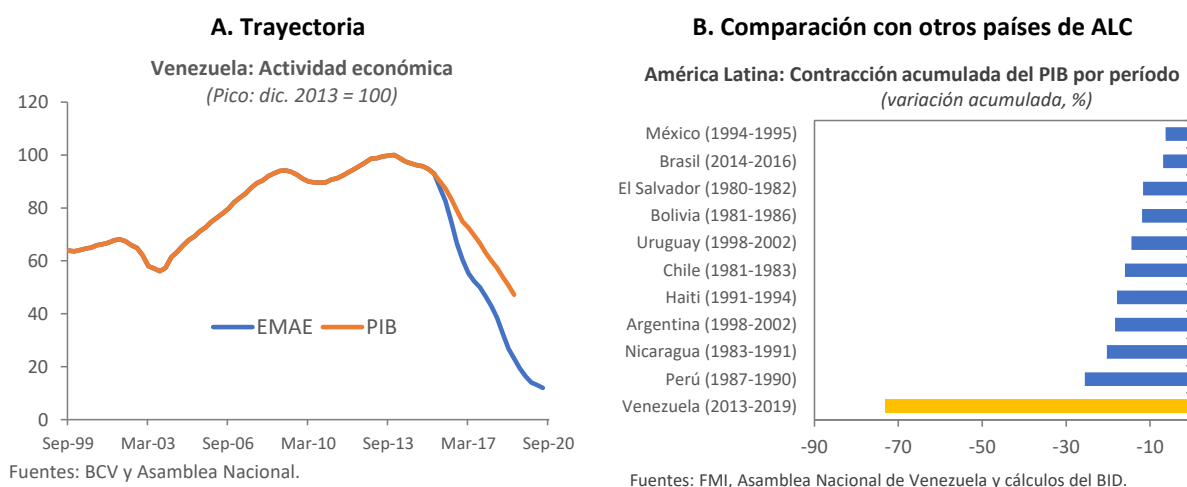
---

<sup>1</sup> Este documento fue elaborado por Emmanuel Abuelafia y José Luis Saboin, bajo la supervisión de Osmel Manzano. El estudio recibió valiosas contribuciones de Gabriela Andrade, Elena Arias-Ortiz, María Julia Bocco, Luis Buscarons, Gustavo García, Jaime Granados, Pablo Ibararán, Rudy Loo-Kung, Marina Massini, Isabel Mejía, Juan Andrés Mejía, Jose Mejía-Guerra, Claudia Mendieta, Leopoldo Montañez, Edgardo Mosqueira, Arturo Muelle, Juan Carlos Navarro, Víctor Olivo, Manuel Pacheco, Carlos Pimenta, Ana María Pinto, Joan Prats, Marcos Robles, Lina Salazar, Ana Santiago, Marco Stampini, Carlos Sucre, Rodrigo Suescun y Héctor Valdez. Se agradecen los comentarios de Ruth Krivoy y Urbi Garay. Los datos utilizados se actualizaron a septiembre de 2020.

## Introducción

**El colapso en que se encuentra la economía venezolana no tiene precedentes.** Desde su pico en diciembre de 2013 y hasta el tercer trimestre de 2020, el tamaño de la economía se ha reducido un 88% (gráfico 1, panel A). Se trata de la mayor crisis registrada en la región latinoamericana (gráfico 1, panel B) y una de las mayores del mundo en países fuera de zonas de conflicto armado (Saboin, 2020). Esta caída se debe tanto a un desplome de la producción petrolera como a una profundización del deterioro de la actividad no petrolera en el país.<sup>2</sup> El producto interno bruto (PIB) no petrolero se encuentra ya un 17% por debajo de sus niveles de 1998 y el PIB petrolero, un 53% por debajo de lo observado 20 años atrás.

**Gráfico 1**  
**Impacto de la crisis en el PIB de Venezuela**



**Las perspectivas de crecimiento para 2020 son igual de desalentadoras.** Si se incluye el impacto esperado de las nuevas sanciones económicas al comercio de petróleo venezolano, el continuo declive de la infraestructura y el impacto de la pandemia del COVID-19, la contracción podría estar entre el 15% y el 30%, especialmente si no se observan cambios sustantivos en el contexto político y la marcha de la economía.

El presente estudio tiene por objetivo resumir las explicaciones que subyacen a la debacle económica del país y que son anteriores a la pandemia del COVID-19, analizar los impactos de la pandemia sobre el país y delinear, para el corto y el mediano plazo, acciones prioritarias orientadas a la atención de la emergencia sanitaria y a la recuperación de la economía.

La primera sección se centra en explicar las causas del colapso de la economía venezolana antes de los últimos acontecimientos. La segunda describe el impacto del deterioro económico sobre la calidad de vida de la población. La tercera resume el entorno para la actividad privada del país. La cuarta se enfoca en los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre la situación macroeconómica y la calidad de vida de la población. La quinta y última sección resume las principales acciones prioritarias orientadas a atacar la

<sup>2</sup> Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el producto interno bruto (PIB) no petrolero disminuyó un 49% entre 2013 y 2018, mientras que el PIB petrolero se redujo en un 28%.

emergencia, a cubrir las necesidades acuciantes de la población y a establecer el andamiaje institucional mínimo para la recuperación y la reconstrucción del país.

## 1. Las causas del colapso

La crisis en que se encuentra Venezuela, que antecede a la pandemia del COVID-19, tiene su origen en el colapso de la actividad económica debido al intervencionismo estatal, los cambios en las reglas de juego del sector petrolero y una gestión macroeconómica irresponsable.

### 1.1. Intervencionismo estatal

**Los últimos 20 años en Venezuela se pueden caracterizar por un alto grado de intervencionismo del Estado, lo cual ha impactado sobre la seguridad jurídica y los incentivos para invertir en el país.** Apoyado en la bonanza petrolera que se vivió en el periodo, el Estado avanzó en la implementación de un modelo intervencionista de la economía a través de políticas de control, tanto de precios como del mercado cambiario, así como de una larga lista de expropiaciones de empresas y activos productivos. El gobierno utilizó los recursos petroleros y la deuda pública para mitigar el impacto de estas medidas en la economía, financiando un elevado nivel de importaciones, especialmente de bienes de consumo, mientras que la economía doméstica no petrolera se contraía y no se ahorraban los recursos petroleros para generaciones futuras.

**El sector transable fue disminuyendo su relevancia en la actividad económica.** Ya desde antes de los inicios de la crisis actual el sector transable no extractivo de la economía había reducido su participación en el PIB del 21% al 16% entre 1997 y 2014, y las exportaciones no petroleras cayeron un 44% en el mismo periodo. El sector no petrolero de la economía se fue convirtiendo en una economía liderada por el sector no transable, con lo cual aumentaron la dependencia y la vulnerabilidad del país tanto a los precios del petróleo como a los flujos de capital externo. Al cierre de 2018, se estima que el sector transable no petrolero había caído hasta un 11% del PIB, mientras que el sector no transable alcanzaba un 69%.

**El control de cambio fue la piedra angular del estrangulamiento del sector privado.** En un país que ya había tenido experiencias poco satisfactorias con los controles de cambio,<sup>3</sup> el sistema cambiario de los últimos 20 años se tornó altamente complejo, lo cual introdujo distorsiones significativas en el funcionamiento de la economía venezolana.<sup>4</sup> Desde su instauración en 2003 y hasta 2019, el esquema constaba de múltiples tasas y el mercado paralelo era considerado ilegal desde 2010. El acceso a divisas se volvió un proceso laberíntico, en el cual las empresas y las personas tuvieron que buscar alternativas para poder obtener moneda extranjera hasta simplemente para pagar importaciones, lo cual afectó la asignación óptima de recursos y generó rentas por arbitraje que se convirtieron en altas salidas de capitales (Reinhart y Santos, 2015). En 2019 se procedió a la reunificación del tipo de cambio, colocando al tipo de cambio oficial en línea con los valores del mercado paralelo. Sin embargo, la tasa de cambio en este mercado ha sufrido una depreciación sustantiva durante los últimos 17 meses, en sintonía con los desequilibrios macroeconómicos que se han suscitado. La divisa nacional se depreció un 8.034% en 2019 y un 584% hasta septiembre 2020.

---

<sup>3</sup> Para mayor detalle, véase Hausmann (1992).

<sup>4</sup> Para mayor detalle, véase Sáez, Zambrano y Vera (2018).

**Control de precios.** La historia del control de precios en Venezuela no empezó con el chavismo,<sup>5</sup> pero el régimen lo reinstauró con fuerza desde 2003 con el establecimiento de precios a una lista de 45 bienes y siete servicios declarados de primera necesidad, que se ha renovado y ampliado en repetidas ocasiones. Las consecuencias del control de precios han sido la escasez, más inflación y el surgimiento del mercado negro. Hasta 2019 regía la Ley Constitucional de Precios Acordados, cuya afectividad ha sido muy limitada debido al proceso hiperinflacionario. En 2020, en el marco de las medidas adoptadas por el régimen durante la pandemia, se anunció la reinstauración de dichos controles de precios.

**El avasallamiento del Estado sobre los sectores económicos fue sustancial.** Según reportes de CONINDUSTRIA, entre 2002 y 2016 el gobierno expropió 692 empresas, correspondientes sobre todo a los sectores manufacturero (49%), de la construcción (27%) y petrolero (12%). Según estudios realizados en 2011, desde esa época la mayoría de estas empresas no estaban produciendo o lo estaban haciendo a pérdida, lo que implica una mayor carga sobre las cuentas fiscales.<sup>6</sup>

**El Estado también asumió un rol activo en el manejo de las importaciones y de la producción.** El Estado asumió responsabilidades de importación de bienes e insumos productivos, y también exigió la venta de ciertos productos directamente al gobierno en un intento por hacer cumplir los mencionados controles de precios y de cambio, además de buscar la viabilidad de las empresas expropiadas. Durante los últimos 20 años, las importaciones por parte del sector público pasaron del 10% al 58% del total importado.

## 1.2. Cambios de las reglas de juego del sector petrolero

**El colapso del sector petrolero, que ya era evidente antes de la crisis del COVID-19, se puede dividir en dos partes: precios y cantidades.** Entre junio de 2014 y febrero de 2016, los precios del petróleo cayeron un 75%, terminando con la bonanza de recursos petroleros que se venía experimentando desde 2004. De esta forma, los precios del periodo 2015-19 fueron un 41% más bajos que los de 2004-14. Aunque los precios fueran menores, si se hubiera mantenido la producción constante a niveles de 2014, actualmente los ingresos por exportaciones serían sustancialmente superiores.<sup>7</sup> Esto demuestra que el problema dentro del sector es también la caída de la producción: en efecto, desde octubre 2015 la producción comenzó a caer de forma sostenida; se redujo un 13% en 12 meses, y en septiembre 2020 llegó a una caída acumulada del 84%. Desde su pico de alrededor de 2,7 millones de barriles por día (mb/d) en 2005, la producción alcanzó alrededor de 0,4 mb/d en septiembre de 2020.<sup>8</sup>

---

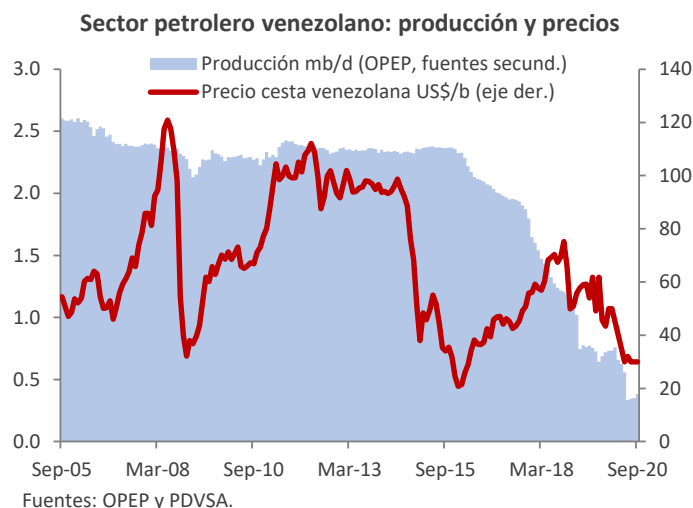
<sup>5</sup> Para mayor detalle, véase Abadí y García (2016).

<sup>6</sup> Para mayor detalle, véase Obuchi, Abadí y Lira (2011).

<sup>7</sup> Esto es US\$12.447 millones más de lo que se recibirá en 2020 (unos US\$3.650 millones).

<sup>8</sup> De acuerdo con las fuentes secundarias que reportan a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

**Gráfico 2**  
**El sector petrolero venezolano: producción y precios**



**El colapso de la producción petrolera está relacionado con el control operacional por parte del Estado y, por ende, con una baja apropiabilidad de los retornos para los socios privados.** La gestión ineficiente, la falta de transparencia y las inversiones necesarias para el mantenimiento de la producción se convierten en los demás componentes responsables de esta estrepitosa caída de la producción petrolera venezolana. Espinasa y Sucre (2017) argumentan que los cambios progresivos de las leyes del sector se tornaron en un obstáculo para la inversión extranjera.

**Esta caída de la producción también se debe a la falta de recursos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).** Cuando se ahonda un poco más en los problemas del sector petrolero, se observa que los recursos de PDVSA fueron destinados a otros fines. Hasta 2015 PDVSA dirigió US\$255.000 millones al financiamiento de programas sociales (entre misiones y fondos específicos), lo que limitó los recursos que podría haber tenido disponible la empresa para realizar inversiones en la industria.<sup>9</sup> Para contrarrestar en parte esta falta de recursos, la compañía se endeudó sobremedida durante el periodo de bonanza del sector petrolero (2004-14).

### 1.3. Gestión macroeconómica irresponsable

**El boom de los precios del petróleo no fue aprovechado para acumular *buffers* sino para estimular el consumo mediante importaciones.** Las exportaciones petroleras tuvieron un incremento marcado durante el periodo 2004-12, gracias al elevado precio del petróleo. Junto con este flujo de divisas se observó un incremento sustantivo de las importaciones. Por otro lado, la capacidad ociosa de la industria se encontraba alrededor del 40% para el mismo periodo<sup>10</sup> y la inversión privada mantenía su tendencia decreciente. De esta manera, en 2012 las importaciones de bienes llegaron al 50% del PIB, en comparación con 1997, cuando representaban el 22%.

**El gobierno no usó los mecanismos prudenciales de ahorro.** Desde los inicios del régimen, el gobierno no utilizó los mecanismos existentes en el país para suavizar los flujos y proveer ahorros para las generaciones

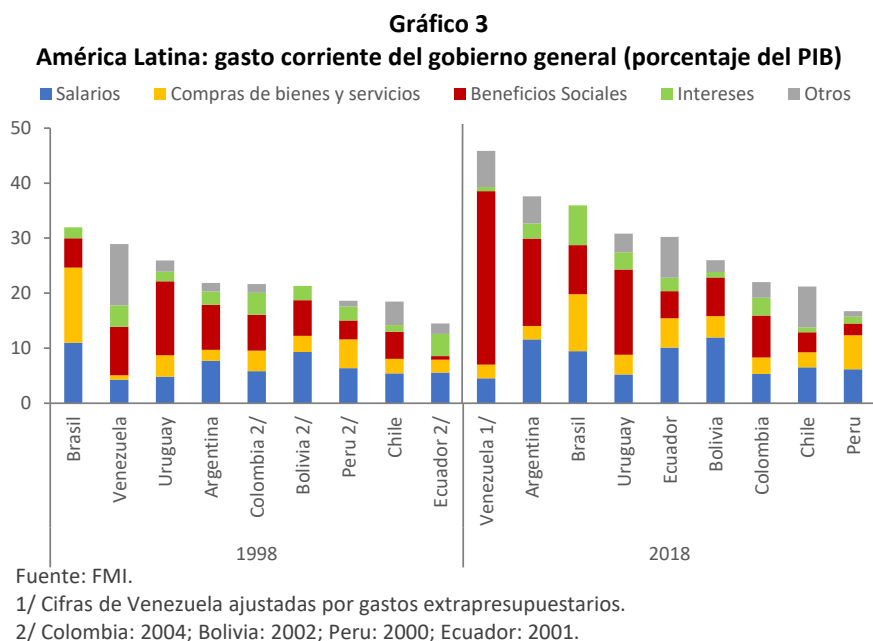
<sup>9</sup> Basado en los estados contables de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

<sup>10</sup> Según cifras de CONINDUSTRIA.



futuras, como –por ejemplo– el fondo de inversión para la estabilización macroeconómica. De haberse utilizado dichos instrumentos, en 2014 se podrían haber acumulado U\$262.000 millones para contrarrestar la caída en los precios del petróleo.

**En conjunción con el incremento de las importaciones, hubo una expansión masiva del gasto público.** Entre 1997 y 2015, el gasto corriente del sector público restringido<sup>11</sup> en proporción del PIB se duplicó. Venezuela, hoy por hoy, es el país con mayor gasto como porcentaje del PIB de la región.



**Así mismo, PDVSA se convirtió en un instrumento de política fiscal.** Ante la opacidad con la que se realizó todo este gasto, y tomando en cuenta que la principal fuente del mismo han sido los ingresos de PDVSA, el ejercicio natural para tratar de consolidar el gasto público venezolano es analizar sus estados financieros. Afortunadamente, en los informes anuales de gestión hasta 2015 la empresa estatal reportó lo que denominó “aportes sociales”. Como se esperaba, estos datos permiten argumentar que la mayoría del gasto de PDVSA se dirigió a misiones y fondos extrapresupuestarios. El total hasta 2015 fue de US\$255.000 millones.

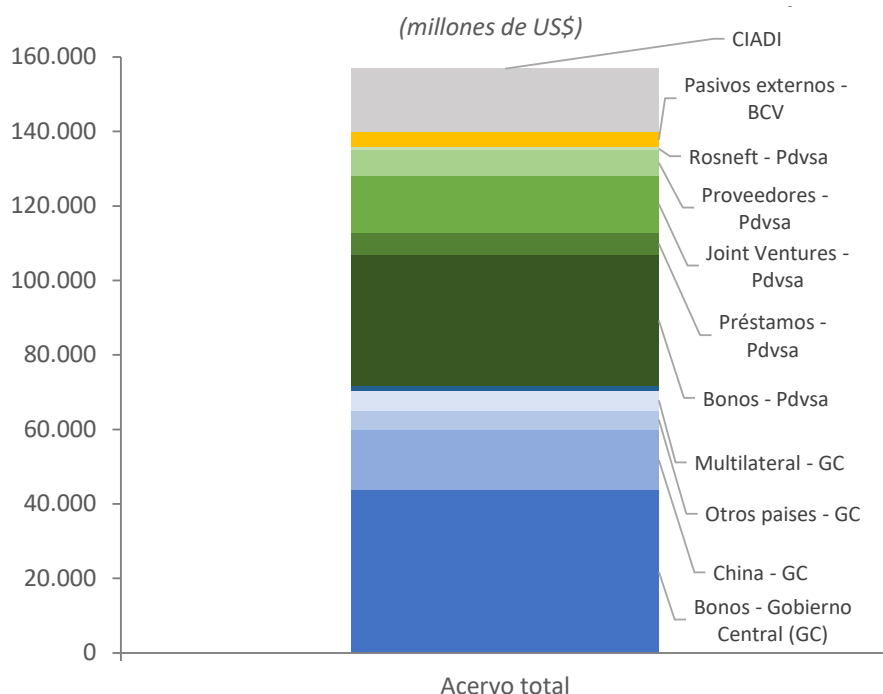
**En medio de este crecimiento masivo del gasto, la deuda pública se incrementó de forma sostenida.** De acuerdo con información del Banco Central de Venezuela (BCV), sin importar que los ingresos petroleros fuesen altos, la deuda externa se multiplicó por cuatro: de este modo, pasó de US\$29.067 millones en 1999 a US\$129.153 millones en 2015.<sup>12</sup> Dentro del endeudamiento, se recibieron recursos del Fondo Conjunto China-Venezuela por más de US\$50.000 millones, los cuales afectan la capacidad del país para generar recursos frescos ante eventuales caídas del precio del petróleo, dado que las amortizaciones de esta deuda se realizan en especie. Ante el cierre de los mercados financieros para Venezuela en 2015 y hasta principios de 2020, el principal mecanismo de financiamiento que se había registrado provenía de

<sup>11</sup> El sector público restringido abarca el gobierno central, los gobiernos estatales y municipales, el seguro social, PDVSA y el resto de las empresas públicas no financieras.

<sup>12</sup> Esta cifra no incluye pasivos contingentes.

la empresa petrolera ROSNEFT (cuyo socio mayoritario es el gobierno de Rusia) hacia PDVSA.<sup>13</sup> De acuerdo con los estados financieros publicados por ROSNEFT, los desembolsos registrados por esta vía alcanzaron un máximo de US\$4.600 millones al cierre de 2017.<sup>14</sup>

**Gráfico 4**  
**Venezuela: deuda externa pública a diciembre 2019/1 (millones de dólares)**



Fuentes: BCV, Bloomberg, Ecoanalítica, Ministerio de Finanzas, Síntesis Financiera y Pdvsa.  
1/ Incluye atrasos en el pago de intereses.

**El acervo total de deuda a diciembre de 2019 alcanzaba US\$157.000 millones.**<sup>15</sup> La deuda externa del país llega a casi el 500% del PIB.<sup>16</sup> Aproximadamente el 46% del *stock* corresponde al Gobierno Central y el 41% a PDVSA, a lo cual se suman deudas del Banco Central por concepto de operaciones swap con el oro monetario. También se incluyen los fallos pendientes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por concepto de las expropiaciones, que representan el 11% de la deuda total.<sup>17</sup> Aunque el país se encuentra en default, un porcentaje sustancial de las exportaciones se destina a amortizar deuda externa. La conjunción de acumulación de deuda externa, elevadas tasas de interés y caída del precio y de la producción de petróleo ha hecho que la carga de la deuda como porcentaje de las exportaciones se quintuplicase hasta alcanzar el 54% de las exportaciones petroleras en

<sup>13</sup> Con el endurecimiento de las sanciones financieras por parte Estados Unidos durante 2019 y 2020, ROSNEFT dejó de operar en Venezuela en el primer trimestre de 2020 y traspasó sus activos al Estado ruso. La salida de esta compañía está también asociada a la caída de las importaciones de gasolina que mantenían el precario suministro de combustible en el país.

<sup>14</sup> Véase la página <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/sanctions-free-rosneft-affiliate-boosting-venezuelan-oil-exports>.

<sup>15</sup> Esta cifra incluye pasivos contingentes y atrasos en el pago de intereses hasta la fecha.

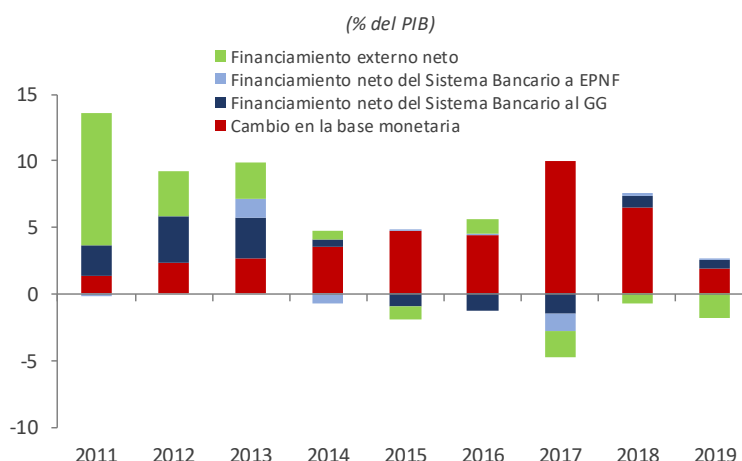
<sup>16</sup> Dependiendo del tipo de cambio que utilice para el cálculo.

<sup>17</sup> En febrero de 2019 hubo un nuevo fallo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de ConocoPhillips por US\$8.700 millones por la expropiación de proyectos petroleros en Venezuela.

2016. Esto precipitó el default de la deuda en bonos en ese mismo año. Aun estando en default, el repago de la deuda a China y Rusia en especie diezma la disponibilidad de recursos líquidos para el país. Ya en 2018 se estimaba que solo el 38% de las exportaciones petroleras generaban recursos líquidos para Venezuela (Global Source Partners, 2019).

**A medida que los ajustes macroeconómicos se postergaron y el financiamiento internacional se fue cerrando, el gobierno acudió al financiamiento monetario del déficit.** Históricamente, PDVSA transfería recursos al Tesoro tanto por el esquema de regalías como por el pago del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, PDVSA financiaba ciertos gastos sociales con recursos de la empresa. Para 2014, cuando el precio del petróleo cayó un 30% y comenzó a cerrarse el acceso al financiamiento externo, el BCV empezó a emitir moneda para financiar a PDVSA y otras empresas públicas no financieras. Estas transferencias alcanzaron su máximo en 2017 (10% del PIB).<sup>18</sup>

**Gráfico 5**  
**Venezuela: financiamiento del déficit del sector público (porcentaje del PIB)**



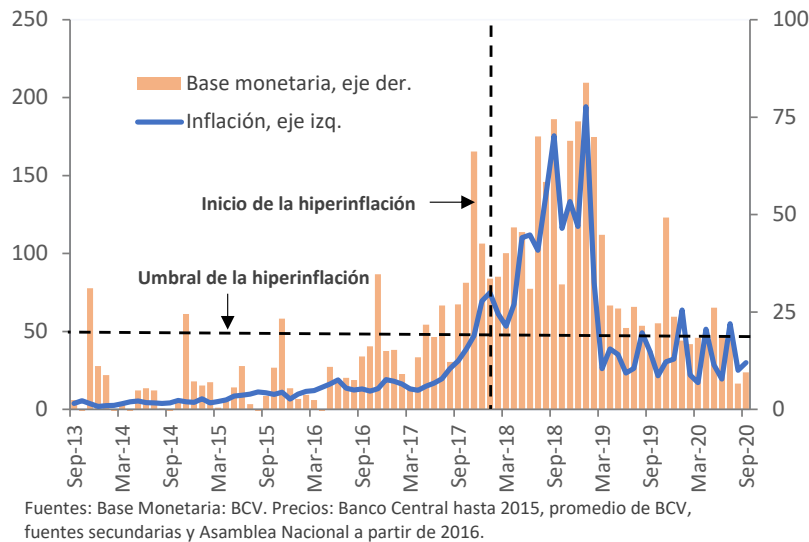
Fuentes: BCV, Bloomberg, Pdvsa y cálculos del BID.  
GG: Gobierno General. EPNF: Empresas Públicas No Financieras

**Cuando en 2017 el financiamiento monetario se desbordó, se detonó el proceso hiperinflacionario que afecta al país.** En ese momento, con un financiamiento internacional inexistente, el financiamiento del BCV al sector público saltó al 10% del PIB y posteriormente, en 2018, por el efecto de la hiperinflación tanto en el poder de compra del señoreaje como en la actividad económica,<sup>19</sup> dicho financiamiento descendió levemente al 6,5% del PIB. Ya para 2019 no superaba el 2% del PIB.

<sup>18</sup> Esto ocurrió en un contexto de deterioro institucional del BCV, donde la autoridad monetaria realizó las siguientes operaciones: i) le entregó al fisco “utilidades cambiarias” generadas por la aplicación de métodos contables inapropiados (unos US\$19.000 millones entre 1999 y 2006); ii) traspasó alrededor de US\$44.000 millones de reservas internacionales al Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) entre 2005 y 2012, y iii) reformó la ley del BCV a finales de 2009, abriendo la puerta para el financiamiento directo del déficit fiscal, al permitir la compra de títulos a PDVSA y otras empresas públicas. Esta reforma también le dio rango legal al traspaso de reservas internacionales al fisco.

<sup>19</sup> La hiperinflación tiene dos efectos: uno nominal (a través de los ajustes de precios para preservar el valor de las operaciones en moneda extranjera) y otro real (que se ve reflejado en la contracción de la actividad económica).

**Gráfico 6**  
**Base monetaria e inflación en Venezuela (variación mensual, en porcentaje)**

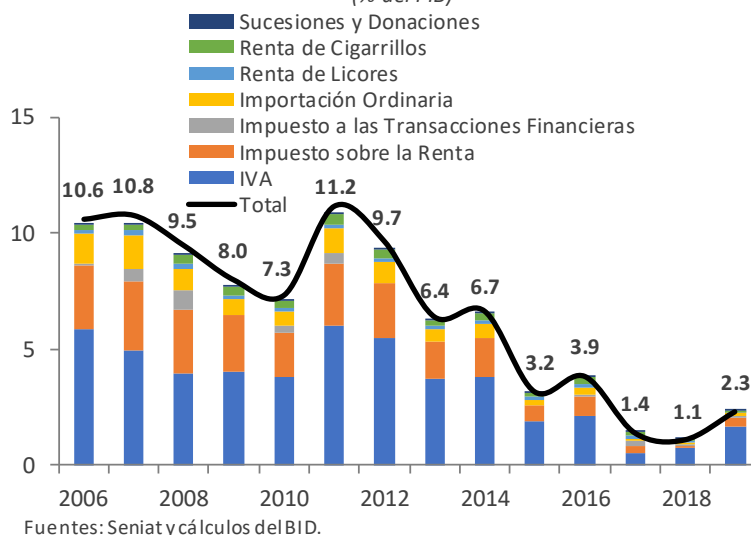


**La hiperinflación ha minimizado la capacidad de compra de los ingresos tributarios.** La aceleración inflacionaria, particularmente desde 2015, ha erosionado casi por completo la recaudación tributaria no petrolera: para 2018 estos ingresos alcanzaron el 1% del PIB, cuando el promedio entre 2006 y 2013 fue del 9,2% del PIB. Esto se debe, fundamentalmente, al efecto Olivera-Tanzi,<sup>20</sup> pues el tiempo de recolección de los tributos va a menor velocidad que los precios internos. A partir de finales de 2018 el gobierno tomó medidas<sup>21</sup> para acelerar los tiempos de pago y recolección de estos impuestos, pero el incremento de los ingresos tributarios ha sido leve: pasó del 1,1% del PIB en 2018 al 2,3% del PIB al cierre de 2019.

<sup>20</sup> Olivera (1967) argumentó que los gastos fiscales siguen más rápidamente el aumento de precios que los ingresos gubernamentales. Dado que los impuestos se calculan sobre los ingresos o ganancias pasadas, al momento de la percepción fiscal su valor real se ha deteriorado. De este modo, la inflación se convierte en una causa autónoma de déficit fiscal. Ello implica que la inflación per se genera un cierto monto de déficit fiscal pasivo. A su vez, dicho déficit se convierte en causa de inflación y se crea una espiral inflacionaria. Olivera concluye que es necesario atacar de fondo los factores inerciales toda vez que sean importantes. Dos años más tarde, Tanzi publicó un libro donde trataba el tema (Tanzi, 1969). Su pertenencia al FMI le permite darle amplia difusión a lo que se denominó el “efecto Olivera-Tanzi”.

<sup>21</sup> Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.396 establece tiempos de pago *semanales* para la declaración de IVA e ISLR.

**Gráfico 7**  
**Recaudación tributaria no petrolera (porcentaje del PIB)**  
 (% del PIB)



**El impuesto inflacionario ha ido perdiendo su capacidad de compra desde 2018.** Al igual que ha sucedido con los ingresos tributarios, la hiperinflación ha disminuido considerablemente el poder de compra de los saldos monetarios reales. Es decir, debido a la caída de la demanda de dinero a consecuencia de la hiperinflación, el poder de compra del señoreaje alcanza el 2% del PIB en términos reales.<sup>22</sup> Esto genera una situación sin precedentes, pues el aumento del gasto público ha pasado a tener un efecto nulo en los salarios y, por ende, en el consumo privado.

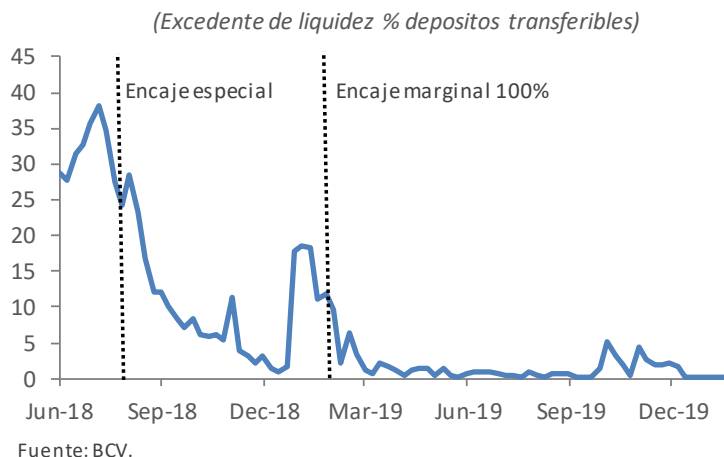
**El gobierno trata de captar más señoreaje mediante un incremento de las reservas bancarias en el BCV, pero a costa de reducir las disponibilidades de la banca y el crédito.** Desde finales de 2018 y principios de 2019 el gobierno decidió aumentar las reservas de los bancos en el BCV (i.e., encajes), llevando el encaje marginal<sup>23</sup> al 100% y manteniendo el encaje ordinario<sup>24</sup> en un 30%. Esta medida ha limitado aún más las disponibilidades de los bancos tanto entre sí como hacia el sector privado, frenando la presión en la tasa de cambio, pero disminuyendo la capacidad de oferta de bienes a la economía al reducir el crédito. Además, la poca liquidez existente se concentra en los bancos más grandes, lo cual va asociado a la asignación discrecional de recursos públicos. En abril de 2020, en paralelo a la presencia del COVID-19, el BCV modificó esta política, con la eliminación del coeficiente de encaje marginal y la suba del encaje ordinario de un 60% a un 93%, lo cual ha implicado una simplificación del cálculo para los requerimientos de las reservas que deben mantener las instituciones bancarias en el instituto emisor.

<sup>22</sup> Véanse Cagan (1956), Bailey (1956), Kiguel y Neumayer (1995), Zambrano (2012) y Saboin (2018).

<sup>23</sup> Corresponde a una porción de la *variación* de las obligaciones netas de los bancos con respecto a la base de reservas. La tasa de este encaje ha sido elevada varias veces en los últimos meses: por ejemplo, del 31% al 40% en octubre 2018 y del 40% al 50% en diciembre del mismo año. Debido a que la base de referencia se vuelve relativamente pequeña en la medida en que avanza la hiperinflación, el encaje marginal tiende volverse el más importante en términos de montos recolectados mediante el impuesto inflacionario.

<sup>24</sup> Corresponde a una porción del saldo total de las obligaciones netas de los bancos.

**Gráfico 8**  
**Liquidez bancaria en Venezuela (excedente de liquidez, porcentaje de depósitos transferibles)**



**Recuadro 1**  
**Avance de la dolarización en Venezuela**

**La dolarización surgió como la respuesta de los venezolanos a la pérdida de los atributos en moneda local como reserva de valor y como medio de pago.<sup>a</sup>** Luego, dada la crítica situación externa del sector público, el gobierno decidió validar este comportamiento de la sociedad. De acuerdo con estudios de consultoras locales,<sup>b</sup> en octubre de 2019 un 56% de las transacciones realizadas en establecimientos comerciales encuestados se efectuaron en moneda extranjera, mientras que, en febrero de 2020, esta proporción ascendía al 64%. Sin embargo, los salarios públicos, las transferencias sociales y las pensiones todavía se pagan en moneda nacional. La dolarización se ha convertido en otra fuente de inequidad en un país que ya es sumamente desigual. En detalle:

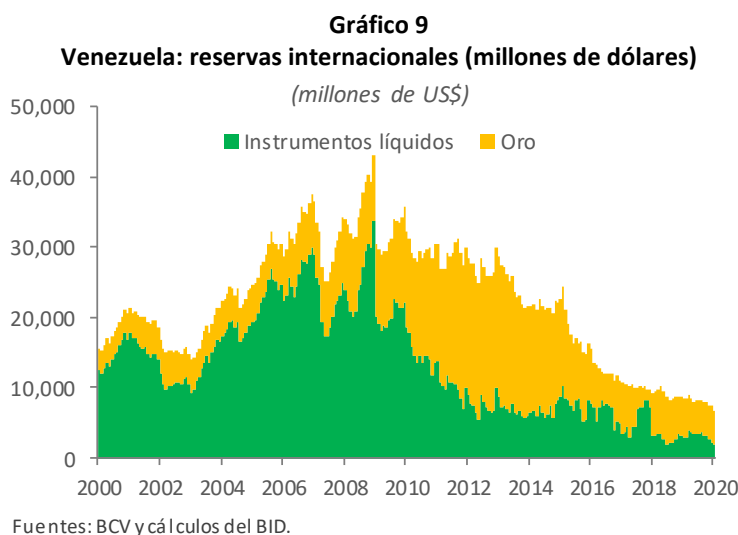
- **Las transacciones de divisas parecen dominar en las regiones.** En el Occidente, en ciudades como San Cristóbal y Maracaibo, por ejemplo, más del 90% de las transacciones se efectuaron bajo esta modalidad, seguido de la región Oriente del país, con Nueva Esparta y Lecherías (un 82% y un 72% de operaciones, respectivamente). Caracas ocupa el sexto lugar, con el 59%.
- **El principal medio de pago en divisas extranjeras es el efectivo.** Se ha reportado que el 81% del total de las transacciones se realizó en efectivo, un 18,6% a través de pago electrónico y un 0,4% por medio de transferencias tradicionales. Además, el 86,7% del total de las transacciones se efectuó en dólares estadounidenses; un 2% en euros y, como dato resaltante, un 9,8% en pesos colombianos.
- **La dolarización proporciona acceso a bienes durables, mientras que la población sin acceso a dólares queda excluida de este importante componente del gasto de los hogares.** Por tipo de bien, los electrodomésticos y los artículos electrónicos se adquieren principalmente con dólares, y cubren casi el 100% de las transacciones. La adquisición de ropa-calzado y repuestos mostró un comportamiento similar: más del 90% de las operaciones fue dolarizado. Los gastos en salud reportaron hacerse en un 76% en moneda extranjera. En contraste, los alimentos y

artículos de cuidado personal se dolarizaron menos, ya que se realizaron en moneda extranjera el 62% y el 48% de los pagos, respectivamente.

<sup>a</sup> Otra de las razones del aumento de la dolarización es la escasez de billetes en bolívars. No se han emitido denominaciones más altas (el billete de mayor denominación es de Bs. 50.000, escasea y, a la fecha de escribir este informe, solo equivale a US\$0,25). Al dividir el acervo de billetes que circulan en Venezuela por la población, se obtiene que hay menos de US\$1 por habitante.

<sup>b</sup> Véanse los informes semanales No. 39 de 2019 y No. 7 de 2020 de Ecoanalítica.

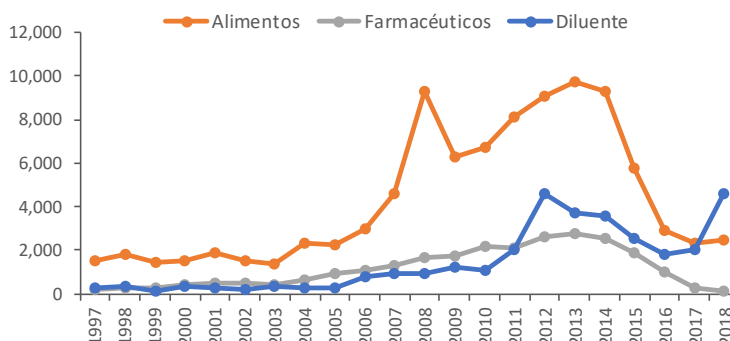
**El cierre de las fuentes de financiamiento externo y la escasa generación de ingresos del sector petrolero llevó al colapso de las reservas internacionales.** Las reservas internacionales alcanzaron US\$43.127 millones a finales de 2008, mientras que al cierre de septiembre de 2020 llegaron a US\$6.465 millones. En términos de cobertura de las importaciones, los coeficientes son relativamente similares (entre el 89% y el 95% de las importaciones totales), debido a la estrepitosa caída de este rubro.



**El ajuste del sector externo tuvo lugar por medio de un recorte de las importaciones, en especial de las correspondientes a alimentos.** Las importaciones habían crecido significativamente entre 2004 y 2012, gracias al precio favorable del petróleo y a la disponibilidad de financiamiento externo. Sin embargo, en 2013 las importaciones totales comenzaron a caer fuertemente, de modo que las de 2018<sup>25</sup> representaron un 15% de las realizadas en 2012. Por su parte, las importaciones de alimentos de 2018 equivalieron a un 18% de las de 2012 y, si a esto se suma la disminución de las importaciones de medicamentos, que en 2018 representaban el 4% de los valores observados en 2012, se evidencia una situación social compleja.

<sup>25</sup> Últimos datos disponibles para socios comerciales según Comtrade, Naciones Unidas.

**Gráfico 10**  
**Importaciones de alimentos, medicinas y diluentes en Venezuela (millones de dólares)**  
*(millones de US\$)*



Fuente: BID con base en COMTRADE - Estadísticas Espejo.

### Recuadro 2 Impacto de las sanciones

**Las sanciones económicas contra Venezuela se han extendido hasta el punto de afectar la operación de PDVSA.** En el marco de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de 2014, el gobierno de Estados Unidos introdujo sanciones tanto a personas vinculadas con el gobierno como a empresas venezolanas. En un inicio, las mismas estaban orientadas a los principales representantes del gobierno de Venezuela (Orden Ejecutiva 13.692). Adicionalmente, se establecieron prohibiciones específicas con respecto a ciertas deudas de PDVSA y del gobierno de Venezuela (Orden Ejecutiva 13.808). En 2018 se dieron a conocer sanciones y prohibiciones para las operaciones con monedas digitales y de compra y venta de oro, y además se extendieron las sanciones a otros miembros del gobierno y sus familias. En enero de 2019 el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la operación de PDVSA en Estados Unidos, entre ellas: la prohibición de exportar o reexportar diluyentes desde Estados Unidos, y la denegación de la venta de deuda relacionada con PDVSA, así como la venta de productos petroleros refinados. El Departamento del Tesoro otorgó licencias especiales a ciertas empresas de origen estadounidense para que siguieran operando hasta mediados de 2019. Desde junio de dicho año hasta la actualidad las sanciones de Estados Unidos a Venezuela se han continuado intensificando mediante la imposición de una orden ejecutiva y 17 designaciones e identificaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC):

- (1) Imposición de la Orden Ejecutiva No. 13.884: suscrita por el Presidente de los Estados Unidos en fecha 05 de agosto de 2019, mediante la cual se ordena la ampliación del régimen de sanciones a todos los bienes e intereses del gobierno venezolano que estén en los Estados Unidos, comprendiendo ello la prohibición de transferirlos, pagarlos, exportarlos, retirarlos o disponerlos de cualquier manera; y se instruye a varias autoridades ejecutivas estadounidense a imponer sanciones económicas y/o migratorias a los individuos y entes que mantengan vínculos con las personas o entes sancionados.



- (2) Imposición de 17 designaciones e identificaciones OFAC: mediante las cuales se establecen restricciones económicas y/o migratorias a decenas de personas y empresas tanto venezolanas como foráneas vinculadas con Venezuela. Fueron emitidas entre el 27 de junio de 2019 y el 12 de marzo de 2020, y han incluido a personas y entes venezolanos y extranjeros vinculados con petróleo y energía, corrupción, erosión de la democracia, y seguridad nacional.

**El impacto de las medidas sobre la actividad económica se empieza a vislumbrar<sup>a</sup>.** El declive de la producción petrolera, tal como se mencionó, ya era notable antes la imposición de las últimas sanciones. El contexto internacional también desempeña un rol importante. Por un lado, la imposición de las sanciones limita aún más las posibilidades de colocar en el mercado internacional la producción de petróleo. Según reportes de prensa, algunas empresas evitaron las sanciones y pudieron comercializar el petróleo, pero con una quita del valor significativa, lo que ha restringido los recursos que el país recibe por la producción. Además, la capacidad de almacenamiento estaba llegando a su máximo, con lo que PDVSA se vería en la necesidad de cortar la producción aún más. En septiembre de 2020 ya estaba por debajo de la mitad de la producción promedio de 2019, esto es: 383.000 b/d, lo cual representa una reducción de 350.000 b/d desde enero de 2020.

<sup>a</sup> Para diferentes estimaciones sobre los impactos de las distintas sanciones en la economía venezolana, ver: Bahar et al. (2019), Oliveros (2020) y Rodríguez (2019).

## 2. Consecuencias sociales del colapso económico

**El colapso de la economía tiene su reflejo en el deterioro de la calidad de vida de la población.** Por un lado, ha habido una estrepitosa caída del poder adquisitivo de los hogares y un consiguiente incremento de la pobreza. Por otro lado, los indicadores sociales se han deteriorado sustancialmente y la provisión de servicios básicos se ha desmoronado.

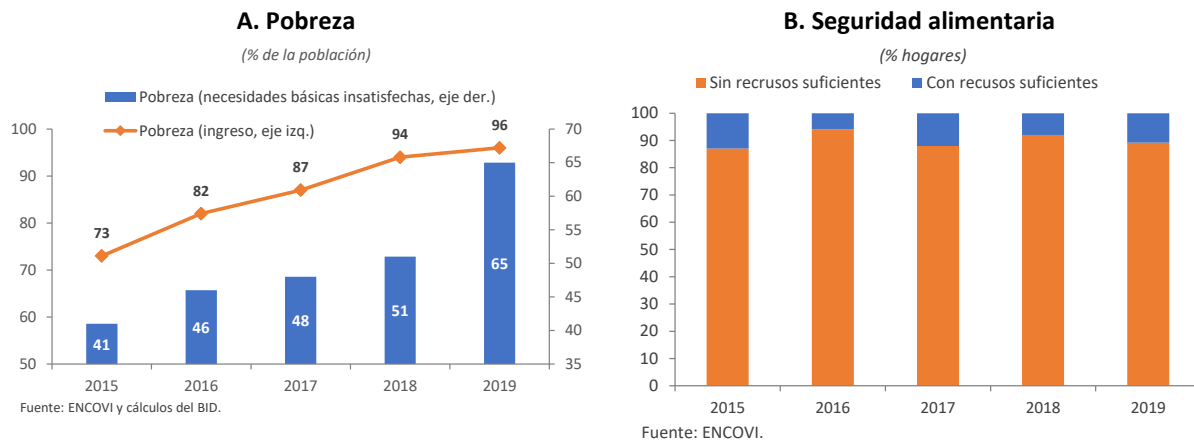
### 2.1. Ingresos y pobreza

**El colapso económico ha provocado un retroceso en los indicadores socioeconómicos.** Antes de la crisis Venezuela tenía indicadores de pobreza inferiores al promedio regional. En 2019/20 la pobreza medida en términos del ingreso alcanzaba al 96% de la población, cifra superior al 73% de 2015 (gráfico 11, panel A).<sup>26</sup> La situación económica actual ha provocado que los hogares no dispongan de dinero para cubrir sus necesidades alimentarias. El 89% de la población reporta que no ha tenido dinero suficiente para comprar alimentos en 2019/20. Esto se compara con el 80,5% de 2015 (gráfico 11, panel B).

---

<sup>26</sup> Corresponde a los hogares con un ingreso menor a US\$3,1 per cápita por día.

**Gráfico 11**  
**Pobreza y seguridad alimentaria**



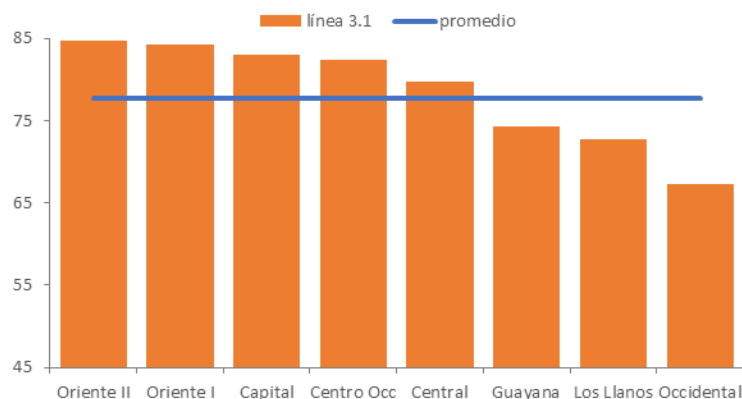
**La pobreza multidimensional aumentó más del 20% entre 2015 y 2019/20.** Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), la pobreza medida de manera multidimensional ha ascendido del 41% en 2015 al 65% en 2019/20. Este incremento se explica sobre todo por un aumento de las privaciones relacionadas con el estándar de vida, lo cual es un reflejo del deterioro del poder adquisitivo de los hogares. En 2016 el 19% del indicador se explicaba por razones referentes a la calidad de la vivienda, mientras que en 2018 solo el 15% se debe a este tema. Con los niveles calculados para 2019/20, Venezuela se encuentra entre los países con mayor pobreza multidimensional de la región, sobrepasado solo por Nicaragua, Guatemala y Honduras.

**La desigualdad en la distribución del ingreso también se deterioró de manera significativa.** Las mejoras en la distribución del ingreso observadas en años anteriores se revirtieron en los últimos años. El coeficiente de Gini empezó a incrementarse en 2015, ya revirtiendo las ganancias de los últimos 20 años. En 2018 el coeficiente de Gini, estimado por la ENCOVI, alcanzó 0,62 y se convirtió en el mayor de la región. Según cálculos basados en la ENCOVI 2019/20, si Venezuela hubiera mantenido la misma distribución del ingreso que en 2015, la pobreza sería un 18% menor.

**Existe una marcada desigualdad territorial en la distribución de la pobreza.** De acuerdo con la ENCOVI 2019/20, la tasa de pobreza en algunas regiones del país era mucho mayor que en otras regiones. Con datos de 2017 la tasa de pobreza en los estados más relegados era un 18% mayor a la tasa observada en el estado Mérida, que tuvo la menor tasa de pobreza extrema en ese año.<sup>27</sup> Asimismo, cabe notar que la pobreza es mucho más fuerte en las localidades pequeñas y caseríos en relación con las grandes ciudades.

<sup>27</sup> Véase Zambrano, Hernández y Traettino (2018).

**Gráfico 12**  
**Pobreza extrema por región en Venezuela**



Fuente: ENCOVI.

### Recuadro 3

#### La clase media en Venezuela

Anova (2019) analiza en detalle la evolución de la clase media en Venezuela. Independientemente de la definición utilizada, el estudio corrobora una caída abrupta y sistemática en el tamaño de la clase media como proporción del total de la población. El ingreso promedio real de la clase media ha caído más de un 70% desde 2010, y hoy en día casi 9 de cada 10 familias que eran consideradas de clase media al principio de la década ya no lo son. A ello hay que sumar el agravante adicional de que la recesión ha infringido un impacto distribucional desfavorable para los segmentos de clase media.

Otro hallazgo importante de este informe está relacionado con el análisis dinámico de un panel sintético de familias, que muestra evidencia de que una gran porción de familias de clase media (26%) ha perdido su estatus en los últimos dos años, mientras que cerca de cuatro de cada 10 hogares venezolanos son clasificados como clase media vulnerable, con riesgo permanente de caer en la pobreza.

Además, hay evidencia de que algunos indicadores relacionados con los niveles de bienestar y seguridad económica han sufrido caídas abruptas. Este es el caso, por ejemplo, de las tasas de formalidad de los individuos que participan en el mercado laboral; el número absoluto de posiciones laborales de alta remuneración; la cobertura de mecanismos de aseguramiento en salud de carácter privado, e indicadores de acceso al agua potable en el hogar, agravado cuando se toman en cuenta indicadores de la calidad de los servicios. Asimismo, el análisis de los factores multidimensionales compuestos que la caracterizan indica que la clase media multidimensional no ha podido soportar el shock de ingresos entre 2013 y 2017.

## 2.2. Gasto social

**El gobierno de Venezuela centró su política social en un sistema de transferencias poco transparente.** Durante la última década se crearon alrededor de 38 misiones que cubren desde temas de alimentación hasta temas de salud y vivienda. La cobertura de las misiones se había incrementado, principalmente enfocada en la alimentación. En 2014, el 8% de la población encuestada en la ENCOVI recibía alguna misión, cifra que en los años siguientes se multiplicó, hasta alcanzar el 92% de los hogares en 2019/2020.

**La cobertura de las misiones se había incrementado, principalmente enfocada en la alimentación.** Durante estos años también se ha observado una disminución de los beneficiarios de otras misiones, más allá de las alimentarias. Alrededor de 15,6 millones de personas son destinatarias misiones de alimentación, cifra que triplica la cantidad que recibía este beneficio en 2015.

**La capacidad de entregar bienes por medio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ha disminuido debido a la crisis.** La cantidad de familias, la frecuencia y el contenido de las cajas CLAP ha disminuido en 2019. El número de familias que recibe este beneficio se redujo de 3,3 millones en enero de 2019 a 3 millones en diciembre del mismo año, cifra que representa el 40% de las familias objetivo del programa. La cantidad de productos ha disminuido en número y por consiguiente el peso. En efecto, aunque el peso normativo era de 19 kg, en enero de 2019 las cajas pesaban 15,6 kg y en agosto 11,2 kg. En promedio, la cantidad de alimentos ha disminuido de 12 a 10 en igual periodo.<sup>28</sup>

**La informalidad del empleo ha aumentado.** Según la ENCOVI 2019/20, alrededor del 44% de las personas empleadas son trabajadores por cuenta propia, mientras que el 25% son trabajadores del sector público y el 22% del sector privado. Así mismo, la proporción de empleos formales ha disminuido del 45% en 2015 al 28% en 2019. Según estimaciones de Robles (2020), la mayoría del empleo privado es informal y el salario del empleado informal e independiente es entre un 55% y un 69% más alto que el salario público.

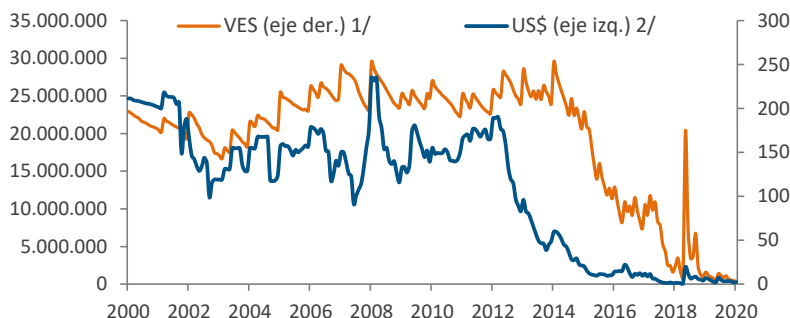
**La tasa de inactividad de los jóvenes se encuentra en los niveles más altos de la región.** El porcentaje de jóvenes de entre 13 y 17 años que no trabajan, no estudian y no buscan empleo en Venezuela alcanza el 16%, es decir: uno de los mayores niveles de la región, mientras que esta proporción aumenta al 30% para los jóvenes de entre 18 y 24 años.

**El salario mínimo ha perdido poder de compra.** Aunque el salario mínimo ha sido objeto de sucesivos aumentos durante los últimos años, estos han sido insuficientes para proteger el poder de compra de los trabajadores. Según estimaciones de Barrios (2019), el salario mínimo no alcanza para comprar los alimentos necesarios para cubrir una ingesta básica de 2.000 calorías diarias. En términos de dólares en el mercado paralelo, el salario mínimo integral representa alrededor de US\$2,3 mensuales al 1 de mayo de 2020, la mitad del valor en dólares de noviembre de 2019.

---

<sup>28</sup> Extraído del informe de Ciudadanía en acción sobre la disposición alimentaria en Venezuela (2019).

**Gráfico 13**  
**Venezuela: Salario mínimo y bono de alimentación**



Fuentes: Ministerio del Trabajo, Ecoanalítica y cálculos del BID.

1/ En bolívares soberanos de mayo de 2020.

2/ Calculado al tipo de cambio paralelo.

Nota: En septiembre 2018 el salario mínimo se incrementó a razón de 100x pero su poder de compra no pudo mantenerse en el tiempo.

### 2.3. Sector salud

**La caída de la inversión social ha generado un deterioro significativo de los indicadores de salud y de infraestructura dentro del sistema.** Durante los últimos años se ha observado un marcado deterioro de los indicadores de salud del país. La tasa de mortalidad materna se encuentra en los niveles de 1960, en algunos lugares la desnutrición alcanza niveles alarmantes, los casos de malaria se han multiplicado exponencialmente. Por otro lado, los hospitales públicos carecen de insumos básicos y de infraestructura adecuada.

**La mortalidad materna está en los niveles de 1960.** La tasa de mortalidad materna se ha incrementado, ya que pasó de 91,7 muertes cada 100.000 casos en la década de 1990 a 112 en 2016, lo cual representa un aumento del 65% desde el año anterior<sup>29</sup> e indica un retorno a los valores de 1960.<sup>30</sup> La tasa de mortalidad infantil empezó a aumentar luego de 2011 y llegó a 21,1 fallecimientos por cada 1.000 habitantes en 2016, de modo que retrocedió a los niveles de fines de 1990. Aunque no es posible identificar las causas específicas, la falta de vacunación y una mayor incidencia de enfermedades infectocontagiosas serían potenciales determinantes de este incremento de la mortalidad (García, Correa y Rousset, 2019).

**La inseguridad alimentaria alcanza al 32% de la población.** De acuerdo con estimaciones realizadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA),<sup>31</sup> el 24% de la población se halla en situación moderadamente insegura desde el punto de vista alimentario, mientras que el 8% de la misma sufre de un alto grado de inseguridad alimentaria. Esto representa un total de 9 millones de personas. Según dicho programa, la mayor incidencia de la inseguridad alimentaria severa tiene lugar en el Delta Amacuro (21%), seguido de las zonas de Amazonas (15%), Falcón (13), Zulia (11%) y Bolívar (11%).

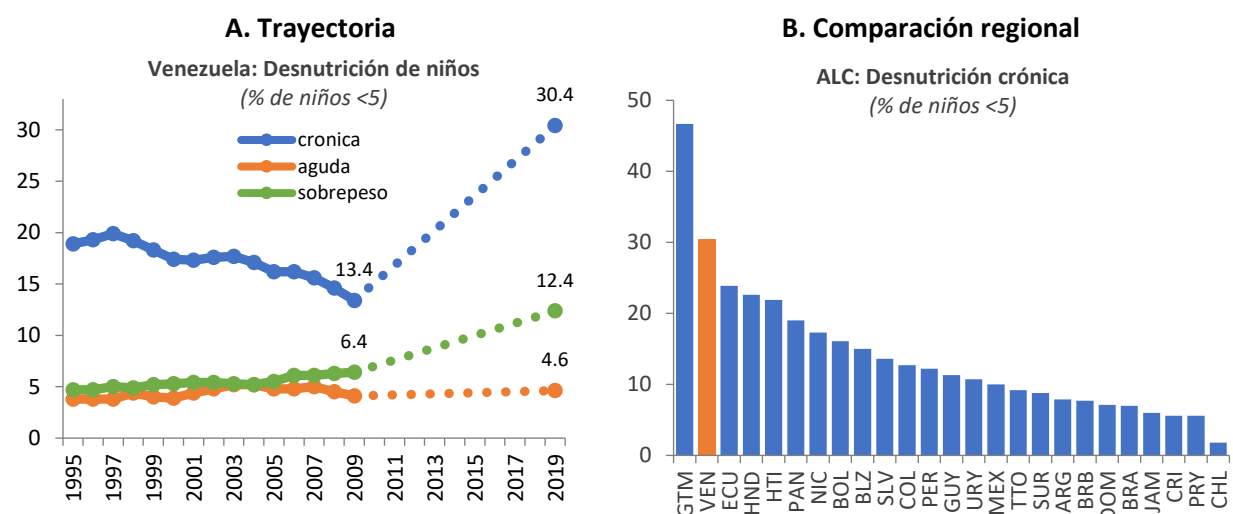
<sup>29</sup> Datos del Boletín Epidemiológico de 2016. Véase <https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Boletin-Epidemiologico-2016.pdf>.

<sup>30</sup> Datos de varios boletines epidemiológicos.

<sup>31</sup> Véase la página <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-food-security-assessment-main-findings-data>.

**Los indicadores de nutrición también han empeorado.** Ya en 2017 se observaba un cambio en la dieta de los hogares, con un aumento de la compra de tubérculos y leguminosas, y una disminución de las proteínas animales y de las hortalizas. Así mismo, en un 58% de los hogares se reporta que una persona mayor de edad ha comido menos de lo debido y en un 43% de los hogares un adulto sintió hambre, pero no comió por falta de alimento. En un 31% de los hogares se reporta que menores de 18 años han comido menos de lo debido (Landeate-Jiménez et al., 2018). Como consecuencia de estos retos alimenticios, el 17% de los niños tiene un peso menor al esperado para su altura, cifras no vistas en la región, y equivalentes a las observadas en Sudán y Yemen y superiores a las que corresponden a niveles de crisis.<sup>32</sup>

**Gráfico 14**  
**Desnutrición infantil en Venezuela**



Fuente: ENCOVI.

**La malaria se considera endémica en el país.**<sup>33</sup> Los casos de malaria se han multiplicado por nueve en los últimos ocho años. A diferencia de la tendencia regional, según la cual los casos de malaria disminuyen, ya que en 2017 eran un 30% menos que en 2010, la incidencia de esta enfermedad infectocontagiosa en Venezuela aumenta. En efecto, el número de casos estimados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasó de 57.000 en 2010 a casi 541.000 en 2018. Así mismo, los fallecimientos debido a esta enfermedad alcanzaron los 680 casos en 2017, en comparación con 52 casos en 2010, una marcada diferencia con las muertes a nivel del continente, que disminuyeron un 40% en igual periodo. Este notable aumento se debe a la reducción de las actividades de control de mosquitos, la escasez de medicamentos para tratar la enfermedad, y la actividad de minería ilegal (HRW, 2019; OMS, 2019).

**La atención hospitalaria está extremadamente deteriorada.** A noviembre de 2019, el 85% de las salas de rayos X no estaba operativo y el 49% de las salas de emergencia presentaba desabastecimiento. Según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hospitales 2019, hubo 2.602 muertes evitables de causa cardiovascular y 2.256 por trauma, principalmente debido a la falta de medicamentos.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> De acuerdo con Caritas Venezuela, Monitoreo de la Situación Nutricional en niños menores de 5 años.

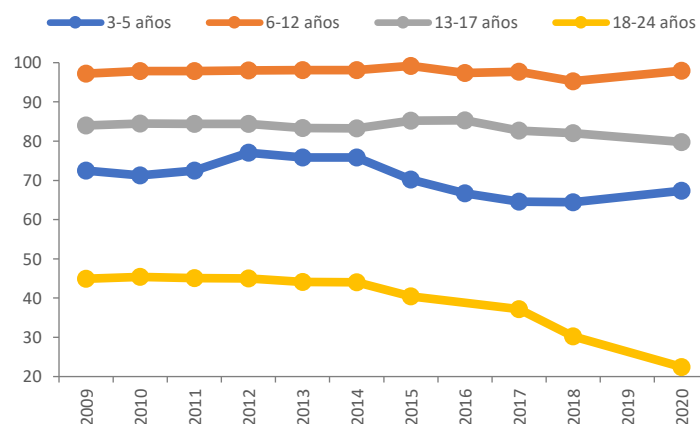
<sup>33</sup> La malaria y la difteria habían sido erradicadas en buena parte del país hace 70 años.

<sup>34</sup> Véase <https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019>.

## 2.4. Sector educativo

**En el sector educativo se observa una disminución de la concurrencia escolar, sobre todo en preprimaria y secundaria.** La tasa de asistencia escolar para los niños de entre 3 y 5 años disminuyó del 75,8% en 2014 al 67,3% en 2019. Así mismo, la tasa de asistencia escolar para los jóvenes de entre 13 y 17 años descendió del 85,3% al 79,8% entre 2016 y 2019. Entre 2015 y 2018 se observa el impacto de la disminución de la asistencia escolar para todos los estratos económicos. La asistencia a centros educativos para los jóvenes de 18 a 24 años se ha reducido sustancialmente para los jóvenes de hogares del quintil 5 de la distribución del ingreso (Freitez, 2017). Como consecuencia de la crisis, ha bajado la demanda de escolaridad privada para los estratos de más altos de ingresos, lo cual ejerce una presión adicional sobre el sistema público.<sup>35</sup> Según cálculos de la ENCOVI 2019/20, el rezago escolar severo (más de dos años) llega al 9% de la población estudiantil.<sup>36</sup> Según información recopilada por la ENCOVI, el rezago escolar ha aumentado de manera significativa, especialmente el rezago leve, que pasó de alrededor del 5%-10% a cerca del 24% en 2019, afectando a los más pobres de manera desproporcionada.<sup>37</sup>

**Gráfico 15**  
**Venezuela: tasa de asistencia escolar por grupo etario (porcentaje)**



Fuente: ENCOVI.

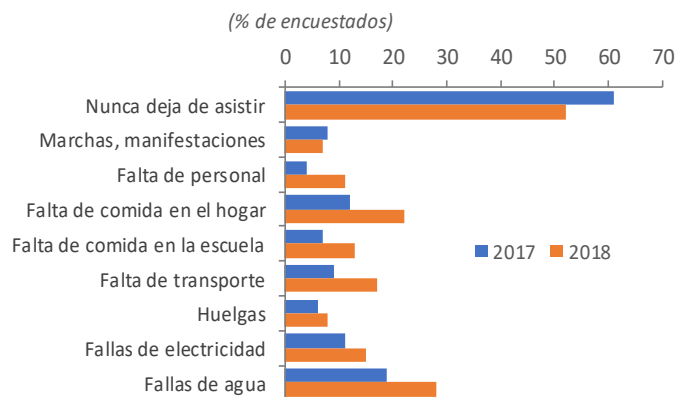
**El empeoramiento del entorno afecta la asistencia escolar.** Según estimaciones de Freitez (2017), el 39% de los alumnos que asisten a los establecimientos educativos se ausenta algunas veces debido a cortes en el servicio de agua (19%), apagones (11%), falta de comida en el hogar (12%), problemas de transporte (9%) y huelgas (6%), hecho que afecta fuertemente a los más pobres.

<sup>35</sup> La proporción de hogares del quintil 5 que recurre a la educación pública aumentó del 45% al 57% entre 2016 y 2017.

<sup>36</sup> Rezago escolar medido como la diferencia entre el grado en el que debería encontrarse el alumno de acuerdo con la edad y el grado que efectivamente cursa.

<sup>37</sup> De acuerdo con la ENCOVI 2020, el 27% de los estudiantes de entre 12 y 17 años pertenecientes al quintil más pobre acusa un retraso severo, en comparación con el 13% para el caso de los estudiantes del quintil más rico.

**Gráfico 16**  
**Venezuela: factores que impiden la asistencia escolar (porcentaje de encuestados)**



Fuente: Encovi.

## 2.5. Provisión de servicios básicos

**La crisis también afectó la provisión de servicios básicos en el país.** Ya antes de los apagones nacionales experimentados en marzo de 2019, la calidad del servicio eléctrico había disminuido notablemente. De acuerdo con la ENCOVI, en 2018 el 26% de los hogares sufría cortes de luz diarios, en comparación con el 13% que se observaba en 2015. El impacto de los apagones va más allá de los inconvenientes domésticos. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Hospitales, hubo 79 muertos debido a las interrupciones eléctricas en los hospitales.<sup>38</sup>

**El servicio de provisión de agua potable también se ha deteriorado recientemente.** Según la ENCOVI, en 2019/20 solo el 25% de los hogares recibió agua de manera regular todos los días, en comparación con el 62% en 2015. Estimaciones realizadas para 2017 muestran diferencias sustantivas en la cantidad de horas del servicio de agua según la localidad de que se trate.<sup>39</sup> Al problema de la frecuencia del servicio se debe adicionar el tema de la calidad del agua recibida. En el área de aseo urbano, solo el 64% de los hogares contaba con ese servicio, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y el 44% de los hogares evaluaba como deficiente la calidad del servicio. A esto se suma el deterioro de la infraestructura de transporte urbano y de larga distancia.

**Los problemas de provisión del servicio afectan a las diferentes regiones del país de manera desigual.** Sobre la base de la encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) de la asociación civil Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente (ESDA),<sup>40</sup> tanto la cantidad de cortes de electricidad como la calidad del servicio de provisión de agua varían entre las diferentes ciudades analizadas. Por ejemplo, casi el 80% de los hogares de Caracas recibe agua de manera inconstante y la valoración del servicio es negativa, mientras que, en San Cristóbal, solo el 40% de la población se ve afectada por faltas en el servicio de agua y un 44% reporta que la provisión de agua es buena. Como consecuencia de la infraestructura eléctrica tan debilitada, luego de los apagones de 2019 se ha

<sup>38</sup> Véase [https://docs.wixstatic.com/ugd/0f3ae5\\_fe95bf73e3bb4693994e883913d93854.pdf](https://docs.wixstatic.com/ugd/0f3ae5_fe95bf73e3bb4693994e883913d93854.pdf).

<sup>39</sup> Véase <http://factor.prodavinci.com/vivirsinagua/>.

<sup>40</sup> Véase <http://wordpress-176087-568269.cloudwaysapps.com/>.



establecido un esquema de racionamiento por ubicación geográfica, y se pueden observar disparidades regionales marcadas.<sup>41</sup>

#### Recuadro 4

##### Migración

Ya antes de la pandemia del COVID-19 la migración venezolana representaba un reto sin precedentes para los países de América Latina. El flujo de migrantes, que en su mayor parte se ha establecido en la región, alcanzó en 2019 los 4,7 millones de personas, cifra que se compara con los 5,5 millones de refugiados sirios desde 2011, y conforma el mayor flujo migratorio en tiempos de paz.<sup>a</sup> Dentro de las causales de la migración se encuentra el deterioro de los servicios públicos, la falta de oportunidades económicas y los niveles de violencia y persecución que existen en el país de origen (UCAB, 2019).

La distribución de la migración dentro de América Latina muestra a Colombia como el principal destino, seguido por Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá y demás países de la región.

El migrante venezolano es relativamente joven, soltero,<sup>b</sup> en su mayoría de entre 18 y 40 años. El grado de educación de los migrantes es en general superior al de la población local de los países receptores. Por ejemplo, de acuerdo con INEI (2019), el 38% de los migrantes venezolanos en Perú tiene estudios universitarios. De la misma manera, el 55% de los migrantes en Chile y el 13% de los migrantes en Ecuador reporta tener educación universitaria completa.

La migración venezolana a la región es reciente, dado que la mayoría de los migrantes han ingresado en los últimos años. En el caso de Colombia, el 74% de los migrantes había llegado al país entre 2018 y 2019. En Perú, hasta 2018, el 76% de los migrantes había arribado ese mismo año. En comparación con otros flujos migratorios internacionales, esta característica limita la posibilidad de contar en el país de destino con redes de contención que faciliten ayuda a los migrantes para que puedan encontrar nuevas fuentes de ingreso.

Una proporción significativa de estos migrantes no tiene acceso a vivienda apropiada, o se encuentra en situación de calle.<sup>c</sup> En la mayoría de los países, los migrantes están concentrados en las principales ciudades.

En los países de destino el trabajo que realizan en general es informal<sup>d</sup> y ya antes de la crisis económica provocada por la pandemia tenían un nivel de salario inferior al de los locales.<sup>e</sup>

En cuanto al empleo en los países receptores, este se encuentra concentrado en sectores específicos. El 47% de los migrantes venezolanos en Colombia, el 57% en Costa Rica, el 55% en Panamá y el 57% en Perú trabajan en los sectores de servicios y comercio.

Aunque los países han venido haciendo esfuerzos encomiables para la regularizar el flujo migratorio hacia la región, alrededor de 1,5 millones venezolanos que han llegado a nuevas tierras se ven afectados por condiciones de migración irregulares, lo que limita su posibilidad de acceso a servicios básicos para ellos y su familia.

---

<sup>41</sup> Para más detalles sobre la situación de cada uno de los servicios básicos, véase Abuelafia y Saboin (2020).

Una gran proporción de migrantes reporta tener familiares aún en Venezuela y en muchos casos envían recursos por medio de remesas hacia el país. Según la información compilada por el Banco Central de Venezuela (BCV), las remesas alcanzaron los US\$3.000 millones en 2019.

<sup>a</sup> Véase [https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#\\_ga=2.69496021.496245112.1581456570-122433343.1581456570](https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.69496021.496245112.1581456570-122433343.1581456570).

<sup>b</sup> En el caso de Ecuador, el 61% de los migrantes reporta ser soltero (OIM, 2019) y, en el de Perú, dicho porcentaje alcanza el 40% (INEI, 2019). Por su parte, para los migrantes centroamericanos radicados en Estados Unidos, esta proporción descende al 36% (Abuelafia, Del Carmen y Deza, 2019).

<sup>c</sup> En Colombia, el 32% no tiene acceso a vivienda, en Ecuador el 16% está en situación de calle y en Perú el 57% vive en condiciones de hacinamiento.

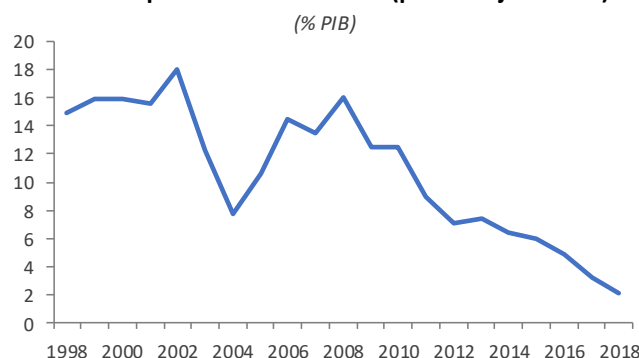
<sup>d</sup> El 90% de los migrantes empleados en Colombia no cotiza al seguro social, al igual que el 18% de los migrantes en Chile. El 92% de los migrantes en Ecuador no tiene contrato laboral y el 88% de los migrantes en Perú se encuentra en igual situación.

<sup>e</sup> El 64% de los migrantes recientes en Colombia cobra menos que el salario mínimo; en Costa Rica los migrantes cobran un 11% por debajo del salario mínimo. En Ecuador, el 86% recibe salarios inferiores al mínimo. En Panamá el 62% de los migrantes percibe menos de US\$500 al mes. En Perú el 18% de la población migrante venezolana es pobre en comparación con el 12% de la población total.

### 3. Situación del entorno de negocios del sector privado

**La inversión privada es casi inexistente en el país.** El Estado no solo aumentó su presencia en la economía, sino que también incrementó la regulación y la intervención de la actividad privada. A medida que esto ocurría, la inversión privada caía sustancialmente, en virtud de lo cual pasó del 15,9% del PIB en 1998 a un valor estimado del 2,1% en 2018.

**Gráfico 17**  
**Inversión privada en Venezuela (porcentaje del PIB)**



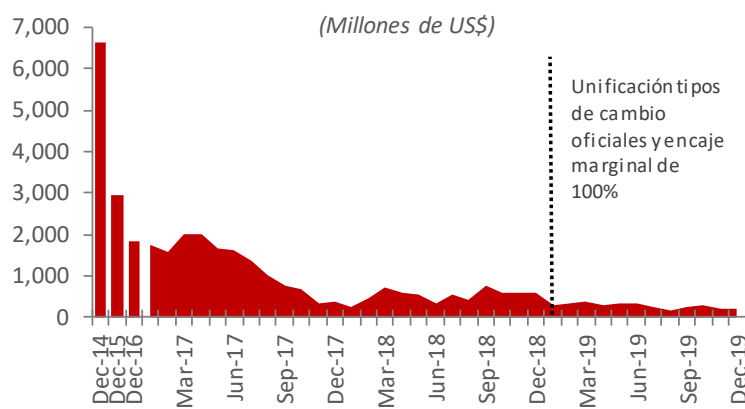
Fuentes: BCV y FMI.

**El crédito ha colapsado.** Desde su pico en 2014, se aprecia una continua y severa reducción del crédito bancario en relación con el PIB (del 29% al 0,5% en 2019). Al cierre de diciembre de 2019, el total de la cartera de créditos ascendía a US\$184 millones (frente a US\$6.630 millones en diciembre de 2014)<sup>42</sup> y el 69% corresponde al sector privado. Esto ha ocurrido en respuesta a limitaciones para la expansión del crédito (primero limitaciones de patrimonio, luego restricciones de liquidez bancaria), la elevada inflación y, más recientemente, la dolarización y la contracción económica. El crédito al consumo ha disminuido del 20% al 7% (asociado esto a dificultades para aumentar los límites de las tarjetas de crédito en función de la inflación).

<sup>42</sup> Al tipo de cambio paralelo de la fecha.

**El sistema bancario se convirtió en agente financiero del gobierno central.** Al cierre de 2019 la banca pública representaba el 78% del total de activos y manejaba el 96% de las inversiones en títulos valores. Tomando en cuenta que los títulos valores del Estado representan el 96% del total de estas inversiones, esto implica que el 62% del sistema bancario actúa como agente financiero del gobierno central, mientras que la cartera de créditos representa solo el 4% del total de activos. Esto implica que la cartera del sistema está altamente expuesta al riesgo soberano, especialmente los bancos públicos. Al tipo de cambio paralelo de cierre de 2019, los activos del sistema bancario ascendían a US\$5.129 millones,<sup>43</sup> de los cuales US\$1.126 millones corresponden a los bancos privados.

**Gráfico 18**  
**Cartera de crédito en Venezuela (millones de dólares)**



Fuentes: Sudeban, BCV y cálculos del BID.

**La problemática de las tasas de interés.** En 2019, siguiendo la tendencia histórica, las tasas de interés activas de los seis principales bancos del país se mantenían en torno al 29%, y para los depósitos de ahorro, en un 21%, niveles notablemente más bajos que los de la inflación, que podría cerrar 2020 en torno al 7.000%. Mientras la inflación no se reduzca sustancialmente a niveles razonables, se convierte en un desafío importante establecer ajustes de tasas de interés que pretendan resolver el desequilibrio, debido a las implicaciones que esto podría tener sobre los riesgos de crédito.

**El sistema bancario se limita a temas de facilitación de transacciones.** El crédito es muy restringido, y los depósitos se encuentran en el 90% de los casos a la vista. El sistema bancario tiene el rol preponderante de proveer un servicio de cámara de compensación para transacciones financieras, gracias a una alta penetración debido a los programas sociales y a la necesidad de manejarse de manera electrónica en un contexto de hiperinflación.<sup>44</sup>

**Más allá de los temas de acumulación, el país tiene retos de productividad.** Las rigideces del mercado laboral y su interacción con el clientelismo político tuvieron un impacto en la eficiencia del sector productivo.<sup>45</sup> Esta realidad continúa siendo efectiva. Si bien la hiperinflación ha “licuado” los costos

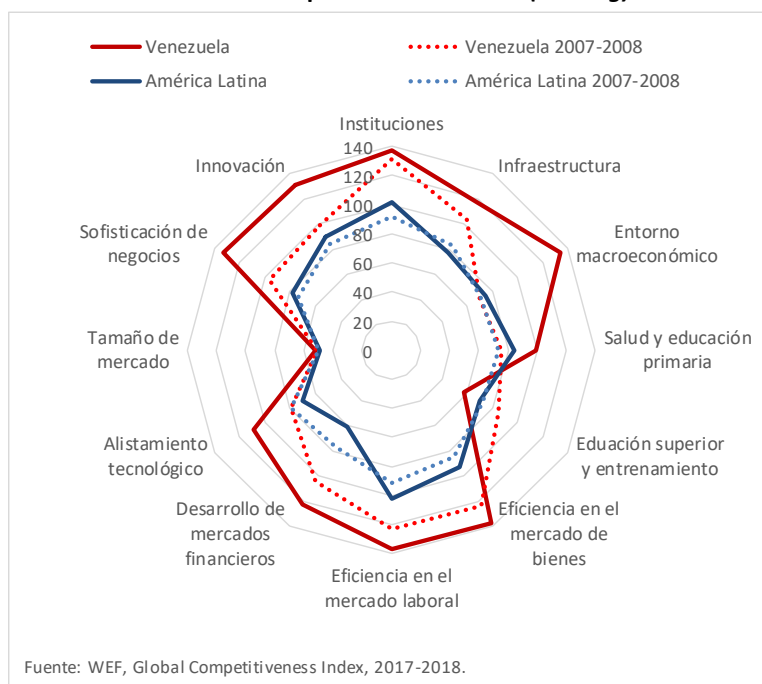
<sup>43</sup> La información se encuentra disponible en el sitio <http://www.sudeban.gob.ve/wp-content/uploads/Estadisticas/2019/BPR-2019-12.zip>.

<sup>44</sup> Gracias a la aceleración inflacionaria que se vive desde 2015, el indicador de moneda y billetes a depósitos ha caído considerablemente: de un 13% en 2013 a un 3% al cierre de 2019.

<sup>45</sup> Véase Bello y Bermúdez (2014).

laborales, el régimen laboral sigue siendo rígido. Según el Informe de Competitividad Global 2017-18 (FEM, 2018), la flexibilidad laboral ubica a Venezuela en el lugar 139 de 140 países. A ello se le suma una configuración institucional en torno al sector petrolero, basada en la caza de rentas y el clientelismo político.<sup>46</sup> Esto tampoco ha cambiado y más bien ha continuado retrocediendo. Venezuela se halla en el puesto 140 de 140 países en los temas institucionales de acuerdo con el Informe de Competitividad Global.

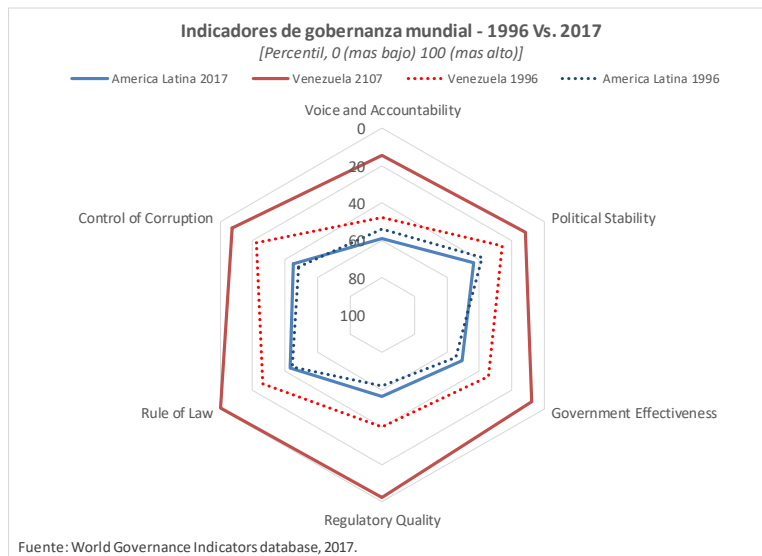
**Gráfico 19**  
**Índice de competitividad mundial (*ranking*)**



**Además, el país enfrenta grandes desafíos en términos de su institucionalidad.** En los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, Venezuela está en el 10% inferior de los indicadores de corrupción. Estas deficiencias institucionales ya se reflejaron en la incapacidad que el país manifestó durante los años ochenta y noventa no solo para recuperarse sino también para manejar los shocks adversos de los términos de intercambio, lo que impidió la reasignación de recursos en la economía ante dichos shocks.

<sup>46</sup> Véanse Manzano (2014), Monaldi y Penfold (2014) y Corrales (2014).

**Gráfico 20**  
**Venezuela: indicadores de gobernanza mundial, 1996 versus 2017**



Finalmente, no se pueden dejar de lado los problemas de seguridad que afectan el clima de negocios y la calidad de vida de la población. El nivel de crimen y violencia existente colocan a Venezuela entre los países más violentos del mundo. La cantidad de homicidios llegó a 28.479 casos en 2016, lo que representó una tasa de 91 homicidios cada 100.000 habitantes en ese año. En 2017 y 2018 se observó una disminución a 23.047 homicidios y una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este valor colocó a Venezuela en primer lugar en 2018, con la tasa más alta de la región, seguida por El Salvador (51 homicidios por cada 100.000 habitantes), y Jamaica y Honduras (con 47 y 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente) (Observatorio Venezolano de la Violencia, 2018).

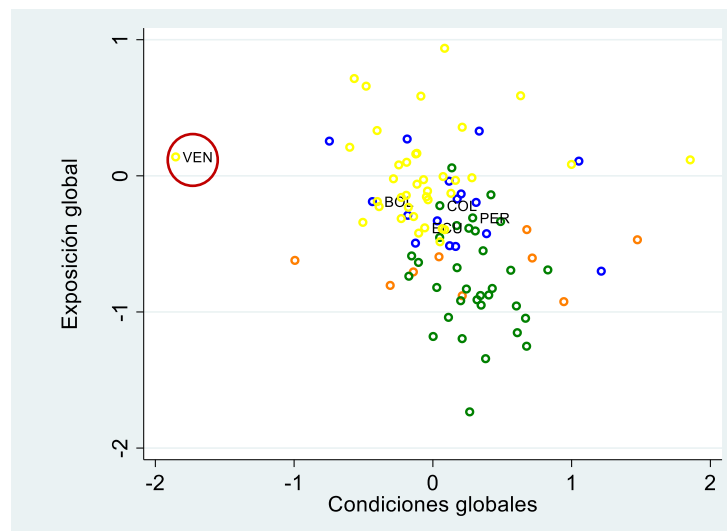
#### 4. El impacto de la pandemia y el surgimiento de nuevos riesgos

Tal como se mencionó con anterioridad, la **pandemia del COVID-19 encuentra al país en medio de una crisis política y económica sin precedentes. La transición política está estancada, y la situación macroeconómica se verá sustancialmente afectada por los efectos de la pandemia a nivel internacional y local.**

**En la región andina, Venezuela es el país más vulnerable a la crisis del COVID-19.** Para una muestra de 96 países emergentes y en desarrollo, tomando en cuenta las vulnerabilidades macroeconómicas, sanitarias e internas de cada país, Manzano y Saboin (2020) argumentan que Venezuela se halla en el grupo de países más vulnerables, junto a Bolivia y Ecuador, entre otros. Los países de este grupo tienen una menor exposición al shock económico global, pero una elevada exposición sanitaria y doméstica. A su vez, reciben la pandemia del COVID-19 en condiciones macroeconómicas, sanitarias e internas bastante precarias. En el gráfico 21 se observa que la situación de Venezuela es mucho más complicada que la de sus pares de la región andina: exhibe una mayor exposición al shock del COVID-19 y, a su vez, posee las peores condiciones iniciales, en este caso no solo de la región, sino de una muestra de 96 economías emergentes. Por lo tanto, **Venezuela tiene retos en todos los frentes. No obstante, en términos de**

políticas públicas el énfasis debería centrarse en atacar las vulnerabilidades internas y sanitarias, pues son las que exacerban la crisis económica.

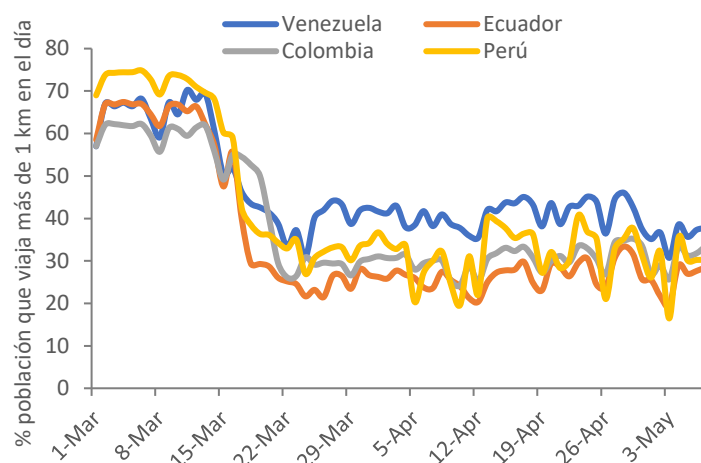
**Gráfico 21**  
**Economías emergentes: relación entre exposición al COVID-19 y condiciones iniciales**



Fuente: Manzano y Saboin (2020).

**La cuarentena ha reducido la movilidad interna en Venezuela, pero en menor medida que en otros países de la región andina.** La hipótesis predominante en Venezuela era que, debido a la crisis económica reinante y a la falta de recursos, incluido el combustible, la circulación dentro del país ya era menor que en otros países de la región antes de la pandemia, y que la movilidad durante la cuarentena se habría reducido aún más. Sin embargo, sobre la base de la información de movilidad generada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha podido estimar que la circulación (medida como porcentaje de celulares que se mueven más de 1 km de su hogar) estaba en los mismos niveles que en los otros países de la región. Luego de la introducción de las medidas de cuarentena, esa proporción disminuyó para todos los países de la región, pero en menor medida para el caso de Venezuela. Resultados similares se encuentran al analizar la información de movilidad entre los distintos estados de Venezuela y al comparar los mismos con la movilidad entre estados en Ecuador.

**Gráfico 22**  
**Región andina: población con movilidad de más de 1 km en el día**  
**(porcentaje del total de celulares)**  
*(% del total de celulares)*



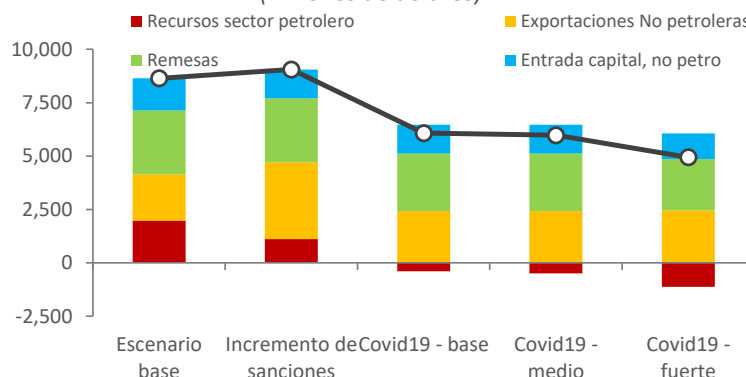
Fuente: BID (2020).

#### 4.1. Impacto macroeconómico

Los canales de propagación del impacto de la crisis derivada de la pandemia en Venezuela sobre la situación macroeconómica abarcan el sector petrolero, por la disminución de la actividad económica, y el ingreso de divisas y su correlato en la situación fiscal del país. A esto se debe sumar el impacto de la propia cuarentena sobre la actividad económica en general.

Desde el punto de vista del sector petrolero, el efecto se debe principalmente a la disminución de la demanda global y a la consecuente caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. A ello hay que sumar la dificultad para colocar la producción doméstica debido a las sanciones, y por consiguiente la disminución de la producción petrolera. Dependiendo de los escenarios sobre precios y producción, los recursos disponibles para la economía disminuirían hasta casi un 50%. El total de divisas, incluidas las remesas, de que podría disponer Venezuela disminuiría de U\$9.000 millones a casi U\$5.000 millones en el escenario de caída de precios más fuerte.

**Gráfico 23**  
**Venezuela: disponibilidad de recursos externos (millones de dólares)**  
*(millones de dólares)*



Fuente: Elaboración propia.

**La actividad económica del sector no petrolero también se verá afectada por la pandemia de manera significativa.** En su informe de perspectivas económicas mundiales de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica una disminución de la actividad económica en Venezuela del 15%, incluida la reducción tanto de la actividad del sector petrolero como del no petrolero. Según nuestras estimaciones, la actividad no petrolera podría reducirse entre un 9% y un 42% en 2020 debido al impacto de la cuarentena y a las limitaciones de movilidad especialmente sobre el sector servicios y comercio.

**La disminución de la actividad económica, especialmente de la actividad petrolera, tiene su correlato en los recursos fiscales.** Los recursos del sector petrolero representan más del 80% del total de los recursos fiscales del gobierno. La contribución del sector petrolero al fisco se verá disminuida notoriamente debido a la caída de los precios y de la producción. El valor de la producción petrolera disminuye de US\$11.000 millones en el escenario base a US\$3.500 millones en el escenario fuerte, lo que implica una reducción de casi el 70% de los recursos fiscales que podría recolectar el gobierno.

**La presión para un mayor gasto público aumenta con la pandemia.** Desde los inicios de la cuarentena el régimen anunció una serie de medidas orientadas a mitigar el impacto en los hogares del aislamiento y de la crisis económica derivada. Adicionalmente, el ingreso de los hogares se supone que ha caído debido a la menor actividad económica, de modo que se puede esperar una mayor presión para el gasto, especialmente en transferencias y/o alimentos.

**La posición fiscal se debilitará aún más en virtud de la crisis.** La combinación entre menores ingresos fiscales y una mayor presión para el gasto traerá aparejado un debilitamiento aun mayor de la posición fiscal. Venezuela carece de fuentes de financiamiento externas y el sistema bancario local no está en capacidad de brindar la escala de recursos necesaria. En años anteriores, el gobierno ha usado el financiamiento monetario del déficit fiscal que provocó el proceso hiperinflacionario que, bajo definiciones estándares, todavía continúa en el país.

**La caída de la disponibilidad de divisas y de los recursos fiscales trae aparejados grandes riesgos.** En función de la experiencia reciente, existe el riesgo de que resurjan las presiones hiperinflacionarias derivadas de la decisión del gobierno de financiar el déficit fiscal por medio de la emisión monetaria. A eso se debe sumar que la escasez de divisas limitará la capacidad del gobierno de importar bienes, especialmente alimentos y combustibles, lo que podría generar mayores limitaciones para la actividad



económica y también en el alcance y el contenido de las cajas CLAP, que –como ya se detalló– constituye el principal programa social que funciona en el país. De hecho, ante la marcada escasez de gasolina que se registró el segundo trimestre de 2020, el gobierno anunció<sup>47</sup> un esquema múltiple de venta de gasolina que fue obtenida en su mayor parte por importaciones desde Irán. Este esquema se presta al arbitraje, pues los tenedores del Carnet de la Patria podrían acceder a gasolina a precios controlados, mientras que en otras estaciones de servicio se anunció un precio de US\$0,50 por litro. Además de las dificultades para financiar importaciones de bienes de consumo, el bajo precio del petróleo coloca a la producción petrolera venezolana en los límites inferiores de rentabilidad y en algunos escenarios indica pérdida de recursos. Esto puede propiciar una mayor desinversión en el sector petrolero, lo cual reduciría la producción actual e impactaría sobre las posibilidades de recuperación del sector en el mediano plazo.

#### 4.2. Impacto en la calidad de vida de la población

Debido a la situación en la que se encuentra el país, se espera que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica derivada de la misma tengan un impacto significativo sobre la calidad de vida de la población.

**La vulnerabilidad de los hogares aumentó.** Según información recopilada del PMA, el 32% de los hogares presenta algún nivel de inseguridad alimentaria, pero –además– el 59% reporta no tener ingresos suficientes para comprar comida y seis de cada 10 familias han gastado sus ahorros para tal fin. Además, de acuerdo con información periodística, la importancia del programa de alimentación escolar<sup>48</sup> se ve limitada por el cierre de las escuelas debido a la pandemia. Si a esta situación pre-cuarentena se suman la imposibilidad de generar ingresos y la falta de capacidad del Estado para proveer ingresos y/o alimentos, la situación de las familias es acuciante.

**Se espera que las remesas disminuyan debido a la crisis en los países de la región.** Las familias receptoras de remesas suelen utilizarlas para financiar el consumo de alimentos y bienes básicos. Según estimaciones de Abuelafia (2020), se podría esperar que las remesas provenientes de Colombia disminuyeran alrededor de un 30% a raíz de la crisis económica en ese país.

**El sistema de salud no está preparado para combatir la pandemia.** Se podría esperar que la pandemia tenga un alto impacto en la población debido a la inoperatividad del sistema de salud, y a la falta de recursos para el testeo y para el cuidado de infectados. Como lo demuestran el resurgimiento y la expansión de enfermedades contagiosas ya erradicadas, el régimen no tiene la capacidad para combatir este tipo de problemas de salud. Tal como se describió anteriormente, la infraestructura hospitalaria se encuentra diezmada, y carece de recursos básicos como guates, tapabocas y alcohol.<sup>49</sup>

**El proceso migratorio podría generar nuevos riesgos.** No hay una respuesta clara sobre cuál sería el impacto de la crisis derivada de la pandemia en los flujos migratorios de corto y mediano plazo. Por un lado, se espera que la condición de los migrantes en los países receptores se deteriore debido al impacto de la crisis en esos países, con lo cual se espera una pérdida sustantiva de empleo y de ingresos, y un aumento de los incentivos para el retorno a su país de origen, según lo descrito por Abuelafia (2020). Según las estimaciones del mismo autor, alrededor de 330.000 migrantes venezolanos que están viviendo en Colombia podrían retornar a Venezuela debido a la crisis en ese país (Abuelafia, 2020). Esto genera un

---

<sup>47</sup> Véase <https://prodavinci.com/anuncian-aumento-de-la-gasolina-a-050-dolares-por-litro-en-200-estaciones-y-esquema-de-subsidios/>.

<sup>48</sup> Véase <https://www.nytimes.com/2019/11/30/world/americas/venezuela-students-hunger.html>.

<sup>49</sup> Véase <https://presidenciave.com/coronavirus/>.

riesgo desde el punto de vista epidemiológico para los países receptores, pues el movimiento de este número de personas puede transformarse en vectores de contagio durante la pandemia, y también para Venezuela, por la necesidad de atender a esta población y tratar de asegurar su testeo y tratamiento. Por otro lado, tal como se ha apuntado, no se espera que las condiciones de vida en Venezuela mejoren en el corto plazo, así que los incentivos para migrar hacia la región se intensificarán al menos se mantendrán con la crisis. Asimismo, hay un mayor control en las fronteras de los países de tránsito y receptores. Este endurecimiento podría generar el surgimiento de redes de tráfico y trata de personas que faciliten los cruces irregulares de frontera.

## 5. Acciones de corto y mediano plazo para atender la emergencia y retomar el crecimiento en Venezuela

En la presente sección se identifican las principales intervenciones orientadas tanto a atender la crisis como a retomar la senda de crecimiento en el mediano plazo en el país. Se trata de acciones específicas para mejorar el acceso a alimentos y salud y también de reformas que permitan el retorno de la inversión privada y la oportunidad de encauzar a Venezuela en un sendero de crecimiento sostenido e inclusivo. Cabe destacar que lo que aquí se expone es un resumen de programas individuales para cada una de las áreas de acción en la estrategia de recuperación; por lo tanto, si el lector busca un análisis más detallado de las intervenciones aquí condensadas, se recomienda consultar Abuelafia y Saboin (2020).

Una transición política ordenada, reconocida y acompañada por la comunidad internacional posibilitaría tomar medidas para enfrentar de manera contundente los retos identificados y permitir la recuperación luego de años de malas gestiones e inacción. Sin embargo, dada la magnitud de los retos, es necesario enfocarse en planificar la secuencia de intervenciones que permitan, en un primer momento, atacar la emergencia y lograr introducir el andamiaje necesario para que, en etapas posteriores, se pueda avanzar con el proceso de reformas y de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Aunque existe voluntad de apoyo por parte de la comunidad internacional, la magnitud de las necesidades financieras es demasiado grande. Por otro lado, la crisis internacional provocada por la pandemia también ha impactado sobre la disponibilidad de recursos tanto domésticos como internacionales (por ahora potenciales) que pudieran estar disponibles para ser utilizados para atender la crisis y la reconstrucción del país. En primer lugar, la producción petrolera se encuentra en mínimos históricos y el precio de la canasta de exportaciones petroleras de Venezuela ha disminuido de manera notable. Esto impacta directamente sobre la disponibilidad de recursos propios para financiar las intervenciones. A esto se debe agregar que la crisis internacional ha incrementado la demanda por recursos de asistencia de otros países dentro y fuera de la región, y también ha disminuido la disponibilidad de recursos por parte de los donantes.

La secuencia de la transición afectará las posibilidades de introducir reformas. La transición en Venezuela es indudablemente incierta, y uno de los temas que afectará la dinámica a mediano plazo es la habilidad por parte del nuevo gobierno para introducir reformas clave al inicio del periodo. La posibilidad de que un nuevo gobierno sea de transición y de que se realice un llamado a elecciones en un plazo determinado limitaría de cuajo la capacidad de realizar reformas, salvo que se encuadren dentro de un gran acuerdo nacional donde se identifique de antemano las políticas que se buscarían implementar en el corto plazo.

El éxito del programa se basa en un esquema de implementación efectivo. La capacidad institucional dentro del sector público en Venezuela se ha deteriorado sustancialmente, a lo cual debe sumarse la migración de capital humano especializado debido a la crisis política y económica. La posibilidad de ejecutar los programas y proyectos aquí enunciados depende de contar con equipos técnicos capaces de llevar adelante estas actividades de manera eficiente y transparente. Por ello, es importante trabajar desde ya en la creación de cuadros técnicos y en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para que permitan canalizar parte de los proyectos.

Las intervenciones orientadas a atender la crisis se detallan a continuación.

### 5.1. Atender las necesidades urgentes de la población

Dada la situación social, es prioritaria una intervención que asegure el acceso a alimentos de la población, en especial de los más vulnerables. Adicionalmente, se deben restablecer las condiciones de salud mínimas.

#### Alimentación

En una primera instancia, se sugiere implementar un programa de transferencias no condicionadas a nivel nacional de cobertura cuasi universal. El reto de este tipo de intervenciones es cómo lograr cubrir a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. Por ello, se propone aprovechar la alta bancarización de la población de Venezuela y realizar transferencias a cuentas bancarias cuyos titulares sean mujeres mayores 18 años,<sup>50</sup> lo que permitiría llegar a un mayor número de beneficiarios de manera rápida. Al mismo tiempo, se lanzarán campañas para extender la cobertura a beneficiarios potenciales que no estén bancarizados.<sup>51</sup> Adicionalmente, se prevé la entrega directa de alimentos en áreas geográficas específicas donde no se cuente con mercados suficientes para proveer de alimentos a la población. Dentro del análisis de alternativas, se contempló la posibilidad de realizar la entrega masiva de alimentos a toda la población en una primera etapa, dada la gravedad de la situación alimentaria en el país. Sin embargo, debido a la pandemia, esta opción se descartó, pues las aglomeraciones de personas podrían convertirse en un foco de contagio. Además de las transferencias monetarias y de alimentos, se espera fortalecer el esquema de alimentación escolar para la provisión de macro y micronutrientes, con foco en las escuelas pobres de las zonas urbanas del país.

Se espera que esta estrategia de transferencias evolucione hacia un esquema más focalizado a medida que se disponga de la información necesaria para implementarla, la necesidad de la crisis alimentaria haya disminuido y surjan oportunidades económicas que permitan generar ingresos laborales para la población. Se espera que los beneficios no se actualicen en términos nominales.

---

<sup>50</sup> La focalización de género está justificada por la literatura sobre transferencias monetarias condicionadas, que muestra que las mujeres priorizan los gastos relacionados con alimentos y niños.

<sup>51</sup> Cabe tomar en cuenta la posibilidad de usar los mecanismos existentes. Una opción para considerar es el Sistema Patria. Según expertos locales, este sistema tiene una base de datos muy completa (como datos familiares e individuales con detalles demográficos, geográficos, etc.). A su vez, el sistema está habilitado para transferir fondos por concepto de bonos del Carnet de la Patria y pensiones a la cuenta bancaria del beneficiario o de la persona autorizada por este. También se utiliza para gestionar el consumo de gasolina según el nuevo sistema de racionamiento, hacer encuestas de salud por el COVID-19 y encuestas de opinión. El Sistema Patria sería un mecanismo eficiente para canalizar transferencias monetarias y debe permitir una calibración de las audiencias objetivo. Para usarlo, es clave poder manejar los protocolos de operación y seguridad.

## Salud

En la etapa de emergencia, las intervenciones planeadas para el sector salud se enfocarían en restablecer la provisión de intervenciones prioritarias y para el tratamiento de enfermedades agudas, en volver a poner en marcha los servicios críticos en los hospitales y su equipamiento, y en contener y mitigar el impacto de la epidemia de COVID-19. Dentro de las actividades se incluyen la compra y la distribución de drogas e implementos médicos para restablecer la provisión de servicios básicos de salud a la población, además de equipos de protección personal, de la capacidad de seguimiento de la pandemia, y para la atención de enfermos. Así mismo, se buscaría mejorar la implementación de programas de salud para enfermedades no transmisibles, expandir los programas de vacunación y restaurar la capacidad de ciertos hospitales. Para ello, sería conveniente involucrar a las sociedades médicas de cada localidad.

Luego de que las actividades de emergencia se hayan completado y se haya logrado el funcionamiento básico del sector salud, las principales intervenciones se enfocarían en expandir los servicios de salud más allá de los críticos, mejorar la infraestructura y la dotación de los hospitales, y optimizar el manejo de los recursos humanos, entre otros temas.

### 5.2. Restablecer el acceso a servicios básicos

Los problemas de infraestructura son estructurales, pero es necesario asegurar un servicio mínimo de electricidad, agua y transporte que permita a los ciudadanos poder elaborar alimentos, trasladarse al trabajo y a la escuela, etc.

## Electricidad

Las intervenciones para el primer año se enfocarían en restablecer la capacidad de generación térmica, con especial atención a la región de Zulia, donde la provisión se ha deteriorado en mayor medida, además de rehabilitar la red de distribución y transmisión, y mejorar el centro de despacho. Este trabajo incluye la realización de auditorías técnicas de las plantas termales e hidroeléctricas y de las principales subestaciones de alto voltaje, la compra e instalación de equipos nuevos en las plantas de generación y las subestaciones de alto voltaje estratégicas, así como la preparación de planes de fortalecimiento de la infraestructura y de la capacidad institucional del ministerio y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Para ello, deberá tomarse en cuenta que la inversión será cuantiosa y que el financiamiento a través de tarifas realistas tendrá que esperar a que haya suministro del servicio. La probabilidad de una intervención exitosa está en regularizar el suministro y hacerlo predecible (muy pocos usuarios estarían dispuestos a pagar por un servicio que no reciben a cambio de una promesa incierta). En este sentido, los apagones imprevistos y los saltos de voltaje serían el principal desafío.

Las intervenciones en el mediano plazo se enfocarían en rehabilitar las plantas térmicas e hidroeléctricas, reducir las pérdidas y aumentar la eficiencia; lograr el fortalecimiento institucional y la liberalización del sector, crear entes de planificación y regulatorios acordes, y establecer un esquema tarifario y de subsidios coherente con el plan macroeconómico del país.

## Agua

Las intervenciones de emergencia en el sector de agua buscan garantizar la provisión de agua para hospitales y otras instalaciones estratégicas, garantizar la provisión de 50 litros por día por persona y

apoyar la reconversión de las empresas hídricas del país. Para lograr esto, en una primera instancia, se procurará la provisión de servicios de agua de emergencia a escuelas, hospitales y edificios públicos. Así mismo, se buscaría formar un grupo de trabajo internacional para brindar apoyo a las empresas locales en la gestión del sistema y también se respaldaría la importación de químicos para el tratamiento del agua. En una segunda etapa se incluiría la realización de inversiones prioritarias, la rehabilitación de los principales reservorios y de las plantas de tratamiento, entre otros temas. Así mismo, se llevarán a cabo actividades de preparación de un plan maestro del sistema para las principales ciudades del país y se pondrá en marcha el diseño de un esquema tarifario acorde.

Luego de pasada la emergencia, se espera trabajar para asegurar la provisión de 200 litros de agua por persona por día y continuar con las inversiones estratégicas ya mencionadas, además de lograr la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y elaborar un plan de manejo de cuencas.

### Transporte

Entre las intervenciones de corto plazo para el sector transporte, se requiere: un inventario de unidades disponibles, costos de reparación, definición de rutas y política de tarifas. En cada ciudad, es necesario concitar esfuerzos coordinados con los gremios y sindicatos respectivos. En un contexto donde el principal programa social será el acceso a alimentos, el transporte de mercancías resultará clave; por lo tanto, habrá que coordinar estrechamente con las redes distribuidoras del sector privado. Debido a la elevada escasez de gasolina que se desató en 2020, es necesario establecer un mecanismo transparente y eficiente de distribución, tomando en cuenta el precio de venta y otros mecanismos como los subsidios directos, para lo cual hay buenas experiencias internacionales.

A mediano plazo, la estrategia del sector transporte debería centrarse en la recuperación de su operatividad y de su rol dentro de la estructura productiva del país. Estas intervenciones incluyen la rehabilitación de la movilidad urbana, el recobro de la operatividad de puertos y aeropuertos, y la rehabilitación de los corredores logísticos más relevantes para la actividad económica del país.

### 5.3. Generar el andamiaje institucional que permita la reconstrucción

El deterioro institucional que ha sufrido el país requiere intervenciones específicas de corto y mediano plazo que reinstauren las instituciones, permitan el funcionamiento de la economía de mercado, atraigan inversiones y faciliten el comercio.

#### Restablecer una economía de mercado

El sector público ha tomado un rol preponderante en la economía de Venezuela, desincentivando la inversión privada y el crecimiento económico. En el corto plazo se deben introducir reformas (o volver a los marcos institucionales previos) que incluyan la eliminación de la regulación de precios y del control al comercio internacional, así como a la producción y al comercio en el sector alimentario y agrícola, y las restricciones a la disponibilidad de divisas para el comercio internacional. De este modo, se deben remover las rigideces del mercado laboral y reinstaurar un marco regulatorio para la competitividad. Así mismo, se necesita instaurar esquemas que permitan la protección de la inversión privada y el funcionamiento de las agencias regulatorias. En el mediano plazo, se aspira a introducir reformas que fortalezcan el Estado de derecho y la seguridad jurídica, especialmente para los inversionistas externos, promuevan la transparencia, y fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado.

### Restablecer el rol del sector financiero y mejorar el sistema de pagos

Es necesario mejorar el funcionamiento del sector financiero, tanto por su rol en el sistema de transferencias de emergencia como por su papel para el financiamiento del comercio y de la inversión. El marco regulatorio tiene que ser reformado para restablecer las reglas prudenciales, la transparencia y las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Por otra parte, se debe fomentar la generación de facilidades de crédito para el comercio. En cuanto al sistema de pagos, se hace también necesaria una reconversión monetaria, eliminando al menos seis ceros; también se debe atender el grave problema del efectivo y gestionar la coexistencia de bolívares y monedas extranjeras (la experiencia de otros países demuestra que la dolarización de facto no desaparece rápidamente); considerar las vulnerabilidades del sistema de pagos digitales (que es sensible a las fallas de electricidad y de telecomunicaciones), y asegurar la interoperabilidad de los sistemas de la banca y los mecanismos gubernamentales como el Sistema Patria.

### Facilitar el comercio y la inversión

El esfuerzo de reconstrucción del país necesitará un sistema de comercio internacional ágil y seguro que permita el ingreso de la ayuda y de los insumos para encaminar el proceso. Por ello, se espera generar un esquema de facilitación comercial en el corto plazo para luego avanzar con la modernización de las aduanas, el restablecimiento de tratados comerciales y la actualización de los regímenes orientados a la atracción de inversiones.

### Reconstruir la capacidad del Estado

Para poder implementar los programas y proyectos enfocados en la reconstrucción es necesario que el país cuente con un sistema de manejo de las finanzas públicas transparente y eficiente, además de información que posibilite la toma de decisiones. Para ello, se debe restaurar la capacidad de recaudar ingresos, contar con un marco que permita su ejecución, incluido un presupuesto, fortalecer las capacidades del Ministerio de Finanzas, y aplicar reformas al marco de compras y contrataciones públicas, entre otros objetivos. En virtud de la emergencia, se deberán generar las capacidades para la implementación de los programas y proyectos por medio de la creación de un centro de gobierno que permita priorizar, planificar, coordinar y comunicar estas acciones. Las acciones para producir información administrativa y estadística (como, por ejemplo, la que atañe a la identidad de las personas) deben implementarse en el corto plazo para apoyar la toma de decisiones.

### Desarrollar el sector extractivo de manera competitiva y sostenible

El sector petrolero continuará siendo el principal motor de la economía por un tiempo; por lo tanto, debe crearse la institucionalidad necesaria para atraer de nuevo capital y conocimiento al mismo. En el sector minero, la institucionalidad es menester para ordenarlo y aprovechar su potencial de realizar su aporte a la economía.

## Referencias

- Abadí, A. y C. García. 2016. El control de precios en Venezuela (1939-2015): de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Económica. Caracas: Eds. Cedice, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila.
- Abuelafia, E. 2020. Migración en la región andina: Impacto de la crisis del COVID-19 y expectativas a mediano plazo. Documento de discusión No. IDB-DP-0777. Washington, D.C.: BID.
- Abuelafia, E., G. Del Carmen y M. C. Deza. 2019. Tras los pasos del migrante: Perspectivas y experiencias de la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos. Washington, D.C.: BID.
- Abuelafia, E., L. Andrián, J. Beverinotti, F. Castellani, L. Castilleja-Vargas, M. Deza, J. Díaz-Cassou y O. Manzano. 2020. El impacto del COVID-19 en las economías de la región (Región Andina). Documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo, por publicarse. Washington, D.C.: BID.
- Abuelafia, E. y J. L. Saboin. 2020. Una mirada a futuro para Venezuela. Documento de discusión No. IDB-DP-0798. Washington, D.C.: BID.
- ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). 2019. Portal de datos sobre situación de refugiados a nivel mundial. Ginebra: ACNUR. Disponible en: [https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#\\_ga=2.69496021.496245112.1581456570-122433343.1581456570](https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.69496021.496245112.1581456570-122433343.1581456570).
- Anova. 2019. Venezuela: Clase Media. Definición, características y evolución reciente. Caracas: Anova.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2020. Mapa de movilidad de las personas. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/movilidad-covid>
- Banco Mundial. 2020a. Indicadores del desarrollo mundial. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.
- . 2020b. Indicadores de Gobernanza. Washington, D.C.: Banco Mundial. Disponible en: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/worldwide-governance-indicators>.
- Bahar, D., Bustos, S. Morales, J., y Santos, M. 2019. Impact of the 2017 sanctions on Venezuela: Revisiting the evidence. Brookings Institution.
- Bello, O. y A. Bermúdez. 2014. The Incidence of Labor Market Reforms on Employment in the Venezuelan Manufacturing Sector 1995-2001. En: R. Hausmann y F. Rodríguez (eds.), *Venezuela before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Bloomberg L.P. 2020. Sanctions-Free Rosneft Affiliate Boosts Venezuela Oil Exports. Disponible en: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-24/sanctions-free-rosneft-affiliate-boosting-venezuelan-oil-exports>.
- CONINDUSTRIA. 2020. Encuesta de Coyuntura Industrial. Caracas: CONINDUSTRIA. Disponible en <https://www.conindustria.org/?wpdmpo=encuesta-de-coyuntura-industria-i-2020>.



- Corrales, J. 2014. Explaining Chavismo: The unexpected alliance of radical leftists and the military in Venezuela under Hugo Chávez. En: R. Hausmann y F. Rodríguez (eds.), *Venezuela before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Ecoanalítica. 2019. Informe Semanal No. 39. Caracas: Ecoanalítica.
- , 2020. Informe Semanal No. 7. Caracas: Ecoanalítica.
- Espinasa, R. y C. Sucre. 2017. The Fall and Collapse of the Venezuelan Oil Sector. (Documento inédito.)
- FEM (Foro Económico Mundial). 2018. Informe de Competitividad Global. Ginebra: FEM.
- FMI (Fondo Monetario internacional). 2019. *Perspectivas de la economía mundial*. Octubre. Washington, D.C.: FMI.
- FMI (Fondo Monetario internacional). 2020. *Perspectivas de la economía mundial*. Abril. Washington, D.C.: FMI.
- Freitez, A. 2017. Encuesta de Condiciones de Vida Venezuela 2017: Educación. Presentación. Resultados Encuesta ENCOVI 2016. Caracas: IIES-UCAB. Disponible en: <https://docplayer.es/75553934-Encuesta-sobre-condiciones-de-vida-venezuela-educacion-anitza-freitez-iies-ucab.html>.
- García, J., G. Correa y B. Rousset. 2019. Trends in infant mortality in Venezuela between 1985 and 2016: a systemic analysis of demographic data. *Lancet Global Health* 2019; 7(3): e331-e336. Disponible en <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02465354/document>.
- Global Source Partners. 2019. Venezuela 2019-2020 Outlook: disorderly default. Nueva York, NY: Global Source Partners.
- Grupo Orinoco. 2018. Hoja de Ruta para recuperar los servicios de agua potable y saneamiento en Venezuela. Caracas: Grupo Orinoco.
- Hausmann, R. 1992. Shocks Externos y Ajuste Macroeconómico. Caracas: Ediciones IESA/Banco Central de Venezuela.
- Hausmann, R. y F. Rodríguez. 2014. Venezuela before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- HRW (Human Rights Watch). 2019. La emergencia humanitaria en Venezuela. Nueva York, NY: HRW. Disponible en: <https://www.hrw.org/es/report/2019/04/04/la-emergencia-humanitaria-en-venezuela/se-requiere-una-respuesta-gran-escala-de>.
- INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 2019. Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú. Lima: INEI. Disponible en: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/libro.pdf).
- Krivoy, R. y T. Herrera. 2019. 2019 Outlook: Suppose Maduro Survives. Nueva York, NY: Global Source Partners.



- Kurmanaev, A. e I. Herrera. 2019. Students Fainting from Hunger in Venezuela's failing School System. *New York Times*. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2019/11/30/world/americas/venezuela-students-hunger.html>.
- Landeate-Jiménez, M., M. Herrera Cuenca, G. Ramírez y M. Vásquez. 2018. Alimentación: encuesta de condiciones de vida de Venezuela 2017. (Documento mimeografiado.)
- Manzano, O. 2014. Venezuela after a century of oil exploitation. En: R. Hausmann y F. Rodríguez (eds.), *Venezuela before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Manzano, O. y J. L. Saboin. 2020. Vulnerabilidades de la Región Andina ante la crisis derivada de la Pandemia del COVID-19. Documento de discusión No. IDB-DP-0775. Washington, D.C.: BID.
- Médicos por la Salud. 2019. Encuesta Nacional de Hospitales 2019. Disponible en: <https://www.encuestanacionaldehospitales.com/2019>.
- Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 2020. Protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de lecciones, a raíz de la emergencia nacional por COVID-19. San José: Ministerio de Educación. Disponible en: <https://www.mep.go.cr/sites/default/files/blog/ajduntos/protocolo-general-distribucion-alimentos-centros-educativos-publicos-suspension-lecciones-raiz-emerg.pdf>.
- Monaldi, F. and M. Penfold. 2014. Institutional collapse: The rise and decline of democratic governance in Venezuela. En: R. Hausmann y F. Rodríguez (eds.), *Venezuela before Chavez: Anatomy of an Economic Collapse*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Observatorio Venezolano de la Salud. 2016. Boletín Epidemiológico 2016. Caracas: Observatorio Venezolano de la Salud. Disponible en: <https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Boletin-Epidemiologico-2016.pdf>.
- Observatorio Venezolano de la Violencia. 2018. Informe Anual de la Violencia 2018. Caracas: Observatorio Venezolano de la Violencia.
- Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. 2019. Mediciones del Servicio de Aseo Urbano, Junio 2019. Caracas: Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Disponible en: <http://www.observatorioovsp.org/aseo-urbano/>.
- Obuchi, R., A. Abad y B. Lira. 2011. Gestión en rojo: evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista. Caracas: Ediciones IESA.
- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Programa Mundial de Comida. 2020. Venezuela Food Security Assessment Main Findings. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-food-security-assessment-main-findings-data>.
- Oliveros, L. 2020. Efecto de las Sanciones Financieras y Petroleras sobre Venezuela. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2019. World Malaria Report. Ginebra: OMS. Disponible en: <https://www.who.int/publications-detail/world-malaria-report-2019>.
- OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Reporte Mensual del Mercado Petrolero. Varios meses. Viena: OPEC.
- PDVSA (Petróleos de Venezuela). s/f. Informe Anual. Varios años. Caracas, Venezuela.
- Prodavinci. 2020. Monitor Prodavinci: “Anuncian aumento de la gasolina a 0,50 dólares por litro en 200 estaciones y esquema de subsidios”. Disponible en: <https://prodavinci.com/anuncian-aumento-de-la-gasolina-a-050-dolares-por-litro-en-200-estaciones-y-esquema-de-subsidios/>.
- Reinhart, C. M. y M. A. Santos. 2016. From Financial Repression to External Distress: The Case of Venezuela. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(2): 255-284.
- Robles. 2020. Presentación de resultados ENCOVI. Washington, D.C.: BID.
- Rodríguez, F. 2019. Sanctions and the Venezuelan Economy: What the Data Say. Torino Economics Latam Economics Viewpoint.
- Saboin, J. L. 2018. Seigniorage, (Hyper)Inflation and Money Demand in Venezuela in the XXI Century: A First Estimation Attempt. GMU Working Paper in Economics No. 18-39.
- . 2020a. Growth Recoveries. Documentos de discusión del Banco Interamericano de Desarrollo, por publicarse. Washington, D.C.: BID.
- Sáez, F., L. Vera y L. Zambrano Sequín. 2018. Estabilización, crecimiento y política cambiaria en Venezuela. Disponible en: 10.13140/RG.2.2.25638.01605.
- SUDEBAN (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario). 2020. Boletín de Prensa Abril 2020. Caracas: SUDEBAN.
- Transparencia Venezuela. 2018a. Empresas propiedad del Estado. Caracas: Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/>.
- . 2018b. Presentación sobre el Carnet de la Patria. Caracas: Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-food-security-assessment-main-findings-data>.
- UCAB (Universidad Católica Andrés Bello). Varios años. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Caracas: UCAB.
- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 2019. Informe de conectividad del transporte marítimo. Ginebra: UNCTAD. Disponible en: [https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/rmt2019\\_es.pdf](https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/rmt2019_es.pdf).
- Zambrano, O., H. Hernández y S. Traettino. 2018. Estimación computacional de pobreza en áreas pequeñas en Venezuela. Caracas, Venezuela. (Documento mimeografiado.)